

CRÍTICA URBANA

REVISTA DE ESTUDIOS URBANOS Y TERRITORIALES

Diciembre 2025 | Vol.VIII | Núm.38



CONQUISTAS CIUDADANAS

ÍNDICE

3

La conquista de la ciudad y el territorio desde lo colectivo

MARICARMEN TAPIA GÓMEZ

4

Defender el mar, salvar la vida

ENRIQUE J. ÁLVAREZ ESCUDERO

9

Regreso a la tierra. La tradición rural-comunitaria en la Inglaterra del siglo XIX

ÁLVARO SEVILLA-BUITRAGO

14

La lluita jurídica en defensa del territori, més enllà de la trinxera

ANA DE SOUSA

17

Articular la acción popular

NACHO COLLADO

19

Gales: la defensa de los derechos de las generaciones futuras

NEUS CASAJUANA

23

Atreverse a pensar fora dos marcos

DAVID ESPERÓN

26

Activismo ambiental en Chile

PILAR VALENZUELA



Rescate ambiental y patrimonial, Cartagena-San Antonio, Chile. Fuente: Comité Hábitat, Colegio de Arquitectos; Patio Ferreiro, Fundación Ojos de Mar y SJF Mosaicos (2025).

30

Hacer ciudad desde lo adverso

ANA SUGRANYES

34

A comarca da Limia: unha paisaxe agraria de transformación e Resistencia

CLAUDIA DE SAS TRUJILLO E LUCÍA ESCRIGAS RODRÍGUEZ

39

El Planter: discurs i acció des del poble

EL PLANTER

43

El conjunto de viviendas que tiene esperanza en el nombre

TARCYLA FIDALGO

46

A contraviento

NERY DÍAZ PRIETO



CRÍTICA URBANA
SUSCRIPCIÓN GRATUITA:
criticaurbana.com

ADHERIDA A:



DORA



LA CONQUISTA DE LA CIUDAD Y EL TERRITORIO DESDE LO COLECTIVO

MARICARMEN TAPIA GÓMEZ

Directora de Crítica Urbana

Si nos detenemos a mirar nuestras ciudades, los espacios con un valor histórico y social, como parques y plazas, edificios patrimoniales, equipamientos culturales, paseos arbolados, recuperación de ríos o una cárcel convertida en museo de la memoria y vivienda pública, todos ellos son resultado de largas demandas y defensas ciudadanas por crear estos espacios para el bien común de sus habitantes.

La actividad inmobiliaria se ha entendido como uno de los agentes de transformación de la ciudad, pero ¿podemos definir la ciudad solo por el volumen edificado? ¿Qué diferencia un condominio residencial o un polígono industrial de lo que llamamos ciudad? ¿Cuándo se comienza a constituir un barrio? La ciudad parece suceder cuando comienzan a articularse actividades, usos y espacios que lo soportan, de carácter colectivo y público. Podemos así pensar la ciudad como lo común, como el espacio público compartido, como el espacio social que permite el encuentro entre las personas.

Detrás de estos espacios conquistados se encuentran pequeñas historias épicas, que nos han legado los lugares y usos más atractivos y entrañables de nuestras ciudades, y también de nuestras aldeas. Los y las protagonistas de estas historias muy pocas veces ocupan el nombre de ese lugar o equipamiento. Muchas veces sus huellas quedan borradas con la generación a la que pertenecieron, y así, los nombres de calles y monumentos hablan de la historia de otros y no de la historia en común, local.

El rescate de las historias sociales que han ido configurando nuestras ciudades no es solo

un acto de reivindicación y de justicia histórica, sino que es un acto de aprendizaje urbano y ciudadano. Somos actores sociales, somos actores urbanos y así lo demuestran los espacios más ricos y vividos de nuestras ciudades. De esta manera, no solo reconocemos una memoria y una raíz colectiva en la forma que habitamos el territorio sino que nos enseña la modo de seguir transformando y defendiendo nuestros espacios de vida.

Si nos detenemos hoy en las victorias contemporáneas, veremos la humildad con que sus protagonistas entienden sus avances. Ellos y ellas buscaban metas mucho más ambiciosas, querían proteger más, querían un mejor espacio, querían que más personas pudiesen disfrutar de ellos y sienten que lograron solo una parte de lo que buscan. Estas mismas personas no hacen suyas las conquistas sino que las entienden como una suma de muchas fuerzas de los que estaban allí y de otros muchos que empujaron a tener las ideas para que fuera posible. Quizás es esa disolución de la conquista como una cuestión colectiva y las urgencias que siguen ocupando a estos ciudadanos y ciudadanas lo que no permite disfrutar y valorar plenamente lo que representan sus logros.

Como hemos visto en los cientos de historias de reivindicaciones de este tipo en Crítica Urbana, y en este número en específico, se trata de un grupo que se organiza, en una completa asimetría de poder pero con la fuerza de saber que están luchando por lo colectivo y la fuerza que genera aunarse permite dar pasos y conquistar espacios. Queremos rescatar y homenajear a quienes están defendiendo nuestros territorios, recogemos su energía, sus valores y su ejemplo para seguir trabajando.

DEFENDER EL MAR, SALVAR LA VIDA

ENRIQUE J. ÁLVAREZ ESCUDERO

Cuarenta y cuatro años después, una expedición francesa que inspecciona los residuos radiactivos en la Fosa Atlántica revive una historia olvidada de lucha, dignidad y ecologismo: el viaje del Xurelo, un pesquero gallego que desafió al vertido nuclear en el Atlántico.

El lunes 14 de septiembre de 1981, un pequeño barco palangrero de madera llamado *Xurelo* zarpó desde Ribeira hacia aguas internacionales con una misión histórica: protestar contra los vertidos de residuos radiactivos que gobiernos europeos realizaban en secreto en pleno océano Atlántico, a unas 350 millas de la costa gallega.

Aquella embarcación modesta se enfrentó, literalmente, a los buques holandeses, que depositaban miles de bidones con residuos radiactivos en una zona conocida como la Fosa Atlántica, a varios miles de metros de profundidad. Las imágenes del *Xurelo*, diminuto, frente a los grandes barcos, recorrieron Europa y despertaron una conciencia que hasta entonces permanecía sumergida en el silencio.

En septiembre de 1981, Galicia apenas comenzaba a despertar del letargo impuesto por décadas de dictadura, y la democracia, aún frágil, no alcanzaba a contener las amenazas que venían del mar. La más inquietante: bidones de residuos radiactivos lanzados impunemente al Atlántico, a escasa distancia de nuestra costa.

Sabíamos que aquello estaba ocurriendo, pero no bastaban las sospechas. Hacía falta verlo, documentarlo, denunciarlo.

Desde finales de los años 70, organizaciones como Greenpeace y la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), entre otras, venían alertando de prácticas altamente contaminantes por parte de varios países europeos, que utilizaban el océano como vertedero nuclear, a pesar del Convenio de Londres de 1972 que teóricamente prohibía estas acciones.

Uno de los puntos clave de los vertidos era la Fosa Atlántica, una depresión oceánica de gran profundidad frente a Galicia. Barcos de Reino Unido, Holanda, Alemania y Francia eran señalados como responsables de depositar allí bidones con residuos radiactivos de baja y media actividad. A pesar de las denuncias, la reacción institucional fue escasa y la opinión pública apenas tenía información.

A primeros de septiembre de 1981, en medio de grandes medidas de seguridad, el barco holandés *Louise Smits* carga barriles que contienen desechos nucleares en el puerto belga de Zeebruoge, mientras el buque ecologista *Sirius*, le viene siguiendo desde Holanda.

Asimismo, los enfrentamientos entre grupos de ecologistas y la policía se suceden en la zona de Brujas (Bélgica), como protesta contra el cargamento de los residuos nucleares procedentes de Suiza, Holanda, Bélgica y Luxemburgo en los bar-



Tripulantes del primer viaje del *Xurelo*. Fuente: Enrique Álvarez Escudero.

cos holandeses *Krinsten Smits* y *Louise Smits*, cuyo destino es el cementerio nuclear del atlántico, a unas 350 millas de las costas de Galicia.

El movimiento de defensa de la naturaleza Greenpeace anuncia que seguirá con su barco *Sirius* a los dos barcos holandeses *Louise* y *Krinsten Smits*, que transportan los residuos nucleares, e intentará evitar por medios pacíficos el vertido de los desechos. Las intensas campañas ecologistas no han impedido, sin embargo, que los buques con residuos nucleares emprendan su rumbo al cementerio radiactivo del Atlántico, donde, desde hace ya más de diez años, los países europeos vierten habitualmente sus desechos nucleares encerrados en contenedores de hormigón, sometidos a fuertes presiones a unos 4.000 metros de profundidad. Expertos nucleares de numerosos países desarrollados habían señalado el peligro que, a causa de estas presiones, representaban esos vertidos.

Asimismo, ADEGA solicita de la Xunta de Galicia y de la Dirección General del Medio Ambiente del Gobierno Central una protesta formal ante

el Consejo de Estado holandés y los Gobiernos responsables de este vertido, para impedir que los buques *Louise Smits* y *Krinsten Smits*, lleguen a arrojar las 2.700 toneladas de residuos frente a las costas gallegas.

En Galicia, a mediados del año 1981, tras años de denuncias ignoradas, se decide dar un paso más. El partido Esquerda Galega, impulsa una acción directa: enviar un barco gallego al lugar exacto de los vertidos para documentar y denunciar lo que estaba ocurriendo.

Encontrar una embarcación no fue tarea fácil. Nadie quería comprometerse. Era una situación políticamente compleja: estábamos en una España de predemocracia, y un movimiento así – civil, autónomo y de confrontación directa – no era bien visto. Finalmente, conseguimos zarpar gracias al coraje de Ánxel Vila, patrón del barco, y los marineros que se sumaron a la causa. Vila era un hombre conocido en Ribeira, con la mar y convicciones en la sangre.



Descarga de bidones con residuos nucleares en la Fosa Atlántica. Fuente: Enrique Álvarez Escudero.

Se trataba de un barco de madera, diseñado para no alejarse demasiado en el horizonte. Hoy, un barco así no habría recibido autorización para salir a mar abierto. Y sin embargo, zarpamos.

Teníamos todo preparado cuando supimos que el *Sirius*, el barco de Greenpeace, había sufrido una avería. A pesar del revés, decidimos seguir adelante. No teníamos cartillas de navegación, y embarcamos como civiles, sin permiso. Al poco tiempo de zarpar, recibimos la orden de regresar, la Ayudantía de Marina de Ribeira había ordenado el regreso del *Xurelo* a puerto, pero la orden fue

posteriormente revocada, y el barco pudo continuar su singladura.

La travesía no era sencilla. No había GPS, ni móviles, ni acceso fácil a información náutica. Una carta náutica de la zona, comprada a última hora sería lo único que el patrón utilizaría para situar la ubicación de la Fosa Atlántica con coordenadas aproximadas y contactos internacionales. El objetivo era claro: llegar al lugar de los vertidos, observar, documentar y regresar con pruebas.

Viajaban a bordo 14 personas entre tripulación y activistas: el patrón, Ánxel Vila, de Aguiño, un marinerero, el cocinero y el jefe de máquinas –Amador, Juan y Ciprián–; los concejales Francisco García Fernández –concejal en Vigo–, Gonzalo Vázquez Pozo –concejal en A Coruña–, Manuel Méndez Fraguas –concejal en Moaña–; el escritor Manuel Rivas; los fotógrafos Xosé Castro “Pepucho”, Gallego y Xurxo Lobato; el periodista Xesús Naya; el miembro del Colectivo Natureza Roxelio Pérez Moreira; y yo mismo, Enrique J. Álvarez Escudero, en representación de la Sociedade Galega de Historia Natural.

La travesía hasta la fosa atlántica duró tres días. La falta de experiencia se hizo sentir: mareos, dudas, silencio en la radio. Nuestra única conexión con tierra firme eran las emisoras costeras de Vigo y Fisterra, que nos guiaban entre partes meteorológicas y mensajes de aliento.

La Fosa Atlántica es vasta, indeterminada. Buscábamos sin saber exactamente qué encontrar. Íbamos en zigzag, escaneando el radar, tratando de distinguir cualquier señal. Al principio seguimos a algún barco equivocado que navegaba por la zona, pero al fin, el 17 de septiembre, dimos con ellos: dos buques inmensos, los ya citados *Louise Smits* y *Krinsten Smits*, de 80 metros de eslora, protegidos por la fragata holandesa *Piet Heyn*, de 130 metros de eslora.

Nuestra embarcación parecía un juguete al lado de aquellos buques. Nos vigilaban helicópteros que volaban bajo, grabándonos, intimidándonos. La fragata escoltaba a los barcos de residuos y trataba de abordarnos. Temimos que nos embistieran. No nos dejaron acercarnos.

Durante la travesía se emite un comunicado, un *mayday*, *mayday*, *mayday*, en gallego, castellano e inglés, pidiendo apoyo a cualquier navío en la zona. Nadie respondió. Ellos estaban protegidos. Nosotros, completamente solos. El texto decía lo siguiente:

“Venimos en el nombre de Galicia, venimos en el nombre de todos los pueblos que quieren la paz y un progreso que no destruya la naturaleza. Venimos en el nombre propio y en el de todas las generaciones

futuras. El Atlántico es una fuente de riqueza y un horizonte de comunicación, no queremos que conviertan el Atlántico en un cementerio nuclear. El Atlántico es una señal de identidad para Galicia y un símbolo de Vida para todos los pueblos. No queremos que lo conviertan en símbolo de muerte”.

Esa fue nuestra voz. Una voz pequeña, a bordo de un barco demasiado frágil. Pero ese día, en medio del mar, sonó con la fuerza de todo un continente.

Era el acto simbólico. Lanzamos flores al mar. ¿Por qué flores? Quizás porque los homenajes en el mar siempre se hacen con flores, como en los entierros, como en los cementerios. Y eso era lo que parecía: un entierro del océano en un cementerio nuclear.

Mientras los bidones caían al agua, tomamos fotografías y grabamos vídeo... o eso creímos. Días después descubrimos que la video-cámara no había grabado nada. Solo quedaron las fotos, las imágenes mentales, el testimonio, y las flores flotando sobre el mar gris.

Las emisoras costeras de Vigo y Fisterra nos habían advertido de que se aproximaba mal tiempo y dadas las condiciones meteorológicas y la imposibilidad de acercarnos al barco iniciamos la vuelta a Ribeira.

Nuestro estado era de euforia. Sí era cierto que se estaba vertiendo con total impunidad. Estábamos ansiosos de ver qué efecto habíamos causado. A la altura de la isla de Sálvora, una embarcación de las autoridades se interpuso en nuestra ruta, subieron a bordo, nos solicitaron nuestra documentación para luego dejarnos continuar a puerto y tiempo después nos llegaría una multa administrativa a cada uno de los participantes.

Ya en el puerto, una muchedumbre, una masa de gente nos esperaba; quedamos sorprendidos de la cantidad de gente. Esperábamos volver como salimos: clandestinamente. Desconocíamos el impacto que había tenido la travesía del *Xurelo*,



Regreso del *Xurelo* a Ribeira. Fuente: Enrique Álvarez Escudero.



el rechazo a los vertidos había sido unánime en la sociedad gallega.

Las fotos del *Xurelo* entre los gigantescos buques de residuos nucleares fueron portada en medios

europeos. Las imágenes no solo mostraban la desproporción de fuerzas, sino también la dignidad de una comunidad costera que se negaba a permanecer en silencio.

Al año siguiente, en agosto de 1982, se repitió el vertido y la protesta. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. Además del *Xurelo*, barcos como el *Pleamar* y el *Arosa I*, que partieron de los puertos de Coruña y Vigo, el *Sirius* de Greenpeace, la movilización internacional que detuvo trenes de residuos radiactivos en Europa y los estibadores ingleses que se negaron a cargar residuos radiactivos, lograron lo que parecía imposible: una moratoria internacional de los vertidos radiactivos al mar, en el marco de la Convención de Londres al año siguiente.

Finalmente, en 1993, la Organización Marítima Internacional (OMI) prohibió definitivamente el vertido de residuos nucleares al océano.

Actualmente, el tema vuelve a primera plana. Una expedición científica francesa ha comen-

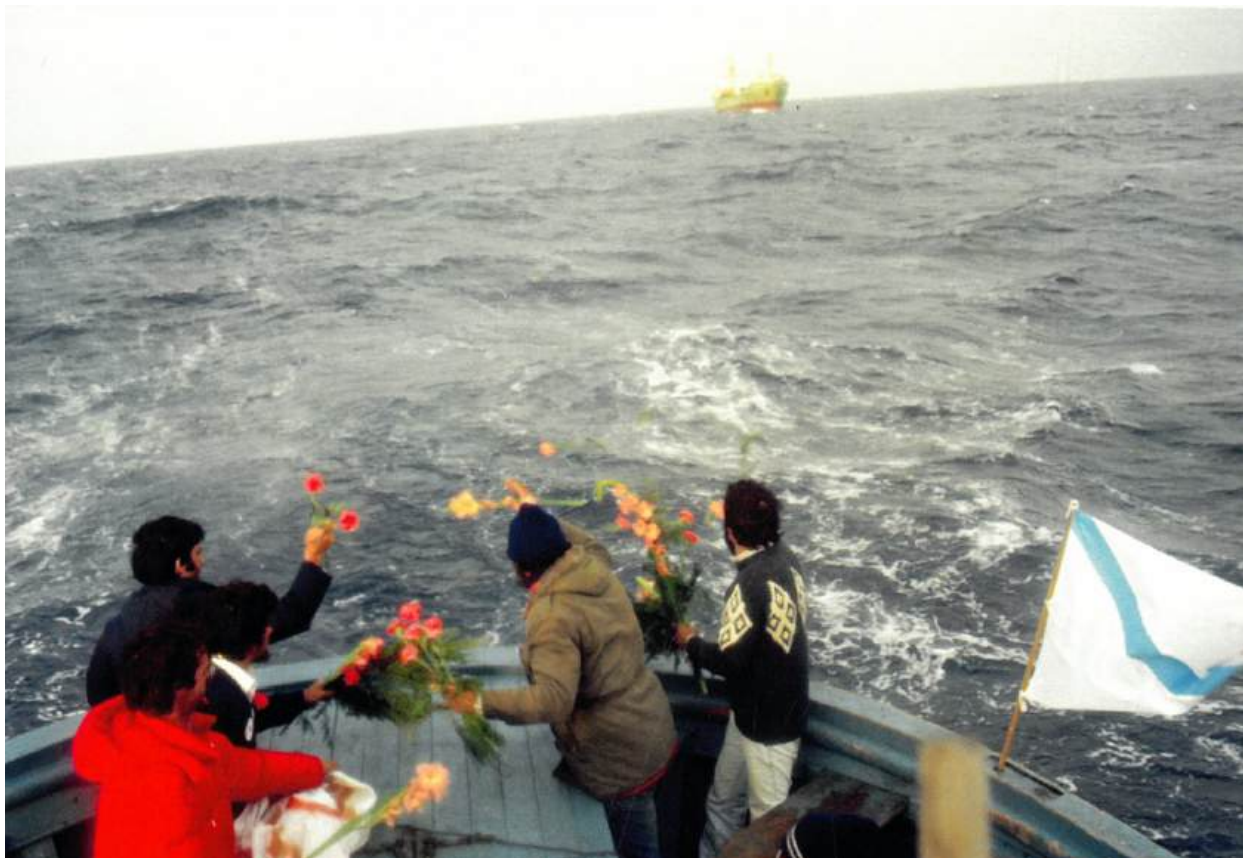
zado a inspeccionar los residuos depositados en la Fosa Atlántica. Ya se han escaneado más de 1.000 bidones y se estima que podría haber hasta 200.000 en el fondo del mar.

Las preguntas que se hacían aquellos gallegos en 1981 siguen vigentes hoy: ¿Qué contienen exactamente esos bidones? ¿Cuánto tiempo seguirán siendo peligrosos? ¿Quién se hará responsable si hay una fuga?

La historia del *Xurelo* es un capítulo clave –y olvidado– de la historia del ecologismo europeo. Una acción local, nacida del mar y de sus gentes, que obligó al mundo a mirar donde no quería mirar. Una historia que hoy, con el tiempo transcurrido y los residuos aún en el fondo del Atlántico, muestra cómo la expedición del *Xurelo* protagonizó una de las historias más emocionantes e intrépidas del ecologismo internacional y vuelve a recordarnos que la conciencia y la acción pueden venir del lugar más apartado y cambiarlo todo.

NOTA SOBRE EL AUTOR

Enrique J. Álvarez Escudero, Catedrático de Biología, ornitólogo, miembro de la SGHN y tripulante en la primera expedición del *Xurelo* contra el vertido de residuos radiactivos en el océano.



REGRESO A LA TIERRA.

LA TRADICIÓN RURAL-COMUNITARIA EN LA INGLATERRA DEL SIGLO XIX

ÁLVARO SEVILLA-BUITRAGO

Durante el siglo XIX Gran Bretaña vio proliferar una constelación de proyectos de “vuelta a la tierra”, iniciativas de grupos que se desvinculaban voluntariamente de la vida urbana para fundar comunidades relativamente independientes en el campo. Respondiendo a los cambios sociales y males que aquejaban a las clases trabajadoras en la ciudad industrial, el movimiento continuaba, bajo nuevas formas, una larga tradición de resistencia contra la expulsión de los estratos populares del medio rural.

Estas comunidades alternativas funcionaron como utopías concretas. Con una vocación explícita de trascender el orden establecido, sus fundadores aspiraban a vivir y trabajar en un entorno más natural y menos restrictivo, convencidos de que esto liberaría la bondad inherente al ser humano en beneficio de todos, promoviendo la cooperación sobre la competencia como motor de transformación social. Las iniciativas combinaban la nostalgia por formas de vida perdidas en dinámicas de desposesión capitalista con una visión orientada a una futura sociedad liberada. La evocación romántica de comunas medievales donde se integraban elementos de la vida urbana y rural o la imagen de autonomía del artesano y el pequeño campesino en sus trabajos sirvieron como poder-

rosos emblemas para imaginar un porvenir alternativo.

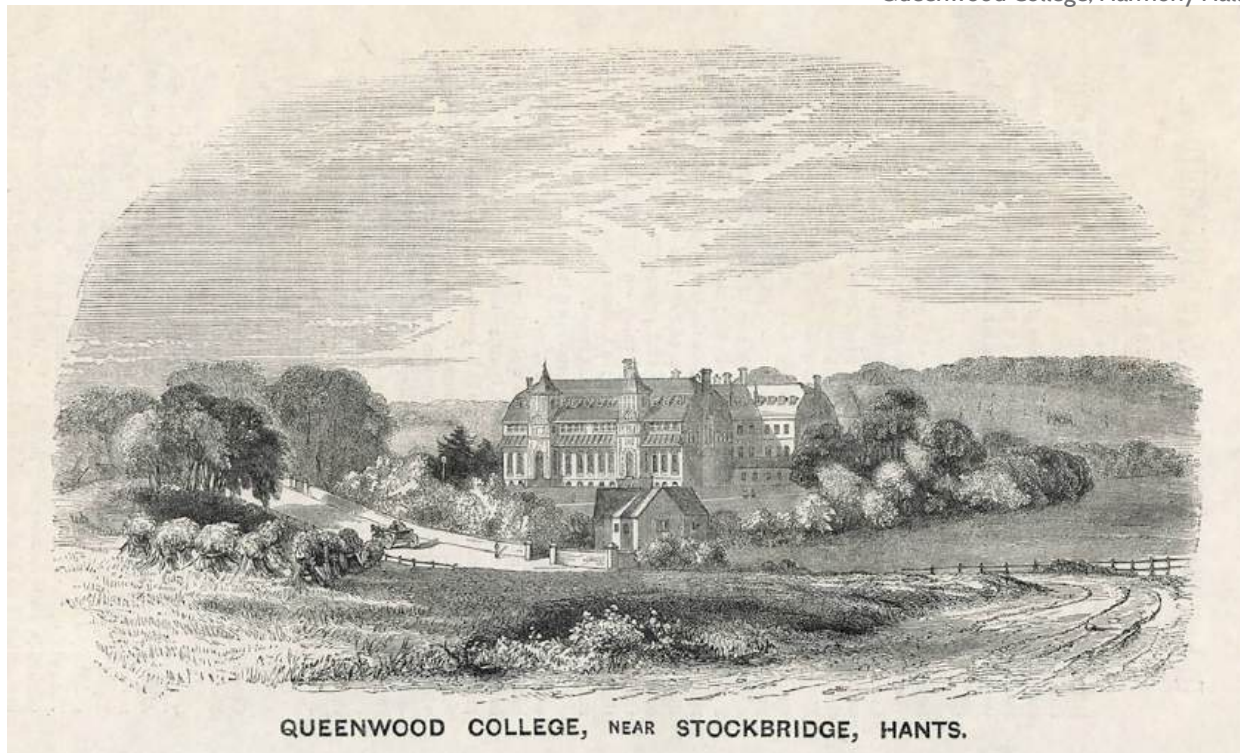
La intensificación de los procesos de urbanización y las penurias asociadas a las Guerras Napoleónicas alimentaron estos proyectos desde principios de siglo. Junto a objetivos más modestos como la reivindicación de huertos para familias trabajadoras, encontramos en esta época iniciativas más ambiciosas como las impulsadas o inspiradas por Robert Owen. Su experiencia práctica comenzó con la transformación del enclave manufacturero de New Lanark, al sur de Escocia, donde mejoró significativamente las condiciones de vida de sus trabajadores. Pero su idea más influyente fue el esquema para la creación de “aldeas cooperativas”, una respuesta al problema del desempleo

y la pobreza que inspiraría la fundación de varias decenas de asentamientos en Gran Bretaña y Estados Unidos, algunas promovidas por él mismo o por sociedades formadas con su apoyo.

A pesar de las dificultades financieras y legales a las que se enfrentaron, enclaves como Harmony Hall (1839), en Hampshire, lograron un éxito importante en la forja de economías alternativas, aplicando formas de agricultura intensiva y demostrando que se podían obtener buenas cosechas de suelos difíciles. De hecho, la prensa burguesa veía estos resultados satisfactorios —antes que las ideas políticas de los colonos— como auténtica amenaza al orden dominante. Owen no estaba solo en la imaginación de este tipo de soluciones. Sus propuestas fueron en ocasiones criticadas por pensadores coetáneos con un enfoque más radical. El reformador irlandés William Thompson, por ejemplo, calificó sus esquemas de paternalistas y desarrolló planes alternativos para comunidades ideales con viviendas y servicios para 2.000 personas en el medio rural, con un fuerte énfasis en la autonomía de los pobladores y la salud, la educación y los equipamientos colectivos al servicio de los trabajadores. Según Thompson la proliferación de estas comunidades cooperativas serviría de plataforma para la progresiva disolución del Estado y la desaparición del capitalismo.

Otra de las corrientes que nutrió el proyecto de vuelta a la tierra fue el movimiento cartista. Frustrado con las vías parlamentarias, un sector del cartismo canalizó sus energías hacia iniciativas más autónomas a mediados de siglo. Una de las más ambiciosas fue el Chartist Land Plan, un programa de comunidades rurales promovido por la Co-operative Land Company. Esta extraordinaria organización, que llegó a tener 20.000 accionistas y 70.000 suscriptores en su apogeo, buscaba generar beneficios económicos y sociales fundamentales al reintegrar a los trabajadores industriales en el campo. El motor de la iniciativa fue Feargus O'Connor. Para él la tierra era el patrimonio del pueblo, arrebatado por los ricos. Su visión implicaba la creación de comunidades de unas 125 familias, con casas individuales vinculadas a aproximadamente cuatro acres de tierra, dotadas de instalaciones comunitarias como escuelas, bibliotecas y centros de salud. O'Connor defendía que este modelo de pequeñas comunidades podría mantener una población de 300 millones de personas. El concepto mismo de formar una compañía con acciones y beneficios, el énfasis de O'Connor en la pequeña propiedad y el asentamiento de familias en parcelas privadas fueron considerados contrarios al socialismo por algunos, incluido un sector importante del movimiento cartista.

Queenwood College, Harmony Hall.



QUEENWOOD COLLEGE, NEAR STOCKBRIDGE, HANTS.

O'CONNORVILLE
The first ESTATE purchased by the
CHARTIST CO-OPERATIVE LAND COMPANY
Established in the Town of Berkshires
BERKSHIRES.
Founded by Thomas Paine
1845

PLAN OF THE ESTATE,

SHOWING THE POSITION OF EACH ALLOTMENT.

TWO ACRES

1. John R. H. H. H.	11. John R. H. H.	21. John R. H. H.	31. John R. H. H.
2. John R. H. H.	12. John R. H. H.	22. John R. H. H.	32. John R. H. H.
3. John R. H. H.	13. John R. H. H.	23. John R. H. H.	33. John R. H. H.
4. John R. H. H.	14. John R. H. H.	24. John R. H. H.	34. John R. H. H.
5. John R. H. H.	15. John R. H. H.	25. John R. H. H.	35. John R. H. H.
6. John R. H. H.	16. John R. H. H.	26. John R. H. H.	36. John R. H. H.
7. John R. H. H.	17. John R. H. H.	27. John R. H. H.	37. John R. H. H.
8. John R. H. H.	18. John R. H. H.	28. John R. H. H.	38. John R. H. H.
9. John R. H. H.	19. John R. H. H.	29. John R. H. H.	39. John R. H. H.
10. John R. H. H.	20. John R. H. H.	30. John R. H. H.	40. John R. H. H.

THREE ACRES

41. John R. H. H.	51. John R. H. H.
42. John R. H. H.	52. John R. H. H.
43. John R. H. H.	53. John R. H. H.
44. John R. H. H.	54. John R. H. H.
45. John R. H. H.	55. John R. H. H.
46. John R. H. H.	56. John R. H. H.
47. John R. H. H.	57. John R. H. H.
48. John R. H. H.	58. John R. H. H.
49. John R. H. H.	59. John R. H. H.
50. John R. H. H.	60. John R. H. H.

FOUR ACRES

61. John R. H. H.	71. John R. H. H.
62. John R. H. H.	72. John R. H. H.
63. John R. H. H.	73. John R. H. H.
64. John R. H. H.	74. John R. H. H.
65. John R. H. H.	75. John R. H. H.
66. John R. H. H.	76. John R. H. H.
67. John R. H. H.	77. John R. H. H.
68. John R. H. H.	78. John R. H. H.
69. John R. H. H.	79. John R. H. H.
70. John R. H. H.	80. John R. H. H.

Sin embargo, los persistentes esfuerzos de O'Connor atrajeron el apoyo de otros grupos, incluyendo colectivos vinculados a la innovación agrícola. El primer asentamiento, O'Connorville (Hertfordshire), fue creado en 1846, seguido por Lowbands y Snigs End (Gloucestershire) en 1847, y Great Dodford (Worcestershire) en 1848. El programa fue abortado prematuramente tras la disolución forzosa de la Co-operative Land por orden del Parlamento. La trayectoria posterior de las comunidades fue desigual. Los colonos eran a menudo agricultores inexpertos, pero algunos asentamientos salieron adelante y se convirtieron en comunidades independientes y prósperas con cosechas abundantes. El patrimonio de estos enclaves se ha conservado parcialmente y la importancia histórica del plan es ampliamente reconocida, influyendo en episodios posteriores como las luchas de la "Revuelta del Campo" en la década de 1870, o las propuestas de la Land and Labor League y la Land Tenure Reform Association, que abogaban respectivamente por la nacionalización de la tierra o la creación de un patrimonio público de suelo agrícola para fines sociales. Más allá de estos vínculos, el Chartist Land Plan dejó una marca indeleble como una lección práctica sobre el potencial y límites de la reforma agraria basada en comunidades a pequeña escala.

Poco después, el prominente intelectual John Ruskin fue artífice de otra importante experiencia de retorno a la tierra. Conocido popularmente por su labor como escritor y crítico de arte, Ruskin se retiró en 1871 al Distrito de los Lagos, al noroeste de Inglaterra, para fundar la Guilda de San Jorge. La organización pretendía fomentar una ética de sencillez y suficiencia entre los trabajadores, desafiando el espíritu consumista de la ciudad industrial a través de una vida reflexiva y ajustada a los ritmos de la naturaleza, con una incipiente concepción ecologista. Para tal fin la Guilda adquirió tierras para el cultivo y apoyó negocios que renunciaran a procesos industriales, incluyendo el rechazo explícito de combustibles fósiles en favor de la energía eólica e hidráulica y la artesanía. Una de las iniciativas más relevantes fue la colonia de Totley, a las afueras de Sheffield, en la que Ruskin se involucró personalmente. La organización compró una granja de trece acres en 1876. La gestión de la colonia fue cedida a un grupo de tra-



Colonia Libre Comunista y Cooperativa de Clousden Hill.

bajadores –zapateros, herreros, etc.– que habían dejado la ciudad con la intención de crear una comunidad cooperativa. Los colonos se dedicaban a cultivar frutas y verduras para el mercado local. De nuevo, la experiencia tuvo un éxito limitado. A pesar de que los proyectos más ambiciosos de Ruskin quedaron parcialmente sin realizar, sus esfuerzos persistentes dejaron una huella positiva en el paisaje y las comunidades locales.

La crisis económica de la década de 1890 alimentó una poderosa oleada de nuevas comunidades, buena parte de ellas inspiradas por filosofías radicales. El movimiento constituía una reacción contra la percepción del fracaso del sistema capitalista, azotado por contradicciones ineludibles. Aunque presentaban una acusada heterogeneidad ideológica, los colectivos socialistas, comunistas y anarquistas que impulsaron este revival rural compartían la convicción fundamental de que una sociedad basada en la cooperación comunal era infinitamente preferible a una dominada por el Estado – y buscaban soluciones concretas a través de iniciativas descentralizadas, el abandono de la ciudad y la revitalización de ac-

tividades agrícolas y artesanales. Las colonias de Clousden Hill (1895), cerca de Newcastle, o Purleigh (1896), en Essex, constituían buenos ejemplos de esta nueva fase. Inspiradas respectivamente por las ideas de Piotr Kropotkin y Lev Tolstoy, se trataba de comunas basadas en la propiedad colectiva del suelo y dedicadas al cultivo intensivo y la manufactura tradicional. Los proyectos de esta época experimentaron también con arreglos económicos alternativos. Algunos prescindieron parcialmente de la moneda convencional, priorizando el intercambio interno y el comercio con enclaves similares a través del trueque y vales de trabajo. También era frecuente en este tipo de experiencias el énfasis en el cuidado del entorno, la dieta vegetariana y otros cambios en la vida cotidiana como aspecto ineludible del regreso a la Naturaleza.

Como en casos anteriores, el porvenir de estas comunidades fue diverso – buena parte de las mismas solo sobrevivió unos cuantos años. Su experiencia, sin embargo, constituye un rico archivo de luchas y visiones para una vida colectiva alternativa en entornos en buena medida autogestionados. También la oleada de comunidades anarquistas y socialistas de finales de siglo tuvo repercusiones duraderas en el imaginario colectivo, algunas inesperadas. Al inicio de *Ciudades del mañana* Peter Hall conecta la formulación de la idea de ciudad-jardín por Ebenezer Howard a la tradición intelectual anarquista, sin mencionar los vínculos más o menos directos que este autor tuvo con algunas de las experiencias antes referidas, a veces a través de amistades estrechas.

Privado de la dimensión política más explícita de estos movimientos, el concepto de ciudad-jardín reformularía el afán de vuelta a la tierra para convertirse en el paradigma más influyente en el urbanismo progresista de la primera mitad del siglo XX. Sus principios alimentarían algunos de los programas de ordenación del territorio más ambiciosos en Europa, como la creación de *new towns* en Gran Bretaña. Sería burdo y cínico considerar estas políticas herederas directas de las iniciativas socialistas y radicales del siglo precedente. Pero algunos de los episodios más honestos y respetables del urbanismo posterior serían difíciles de imaginar sin aquellos precedentes. Puede que sea motivo tenue para la esperanza. Pero también, sin duda, un aliento del pasado que nos interpela a continuar esa tradición de luchas y creatividad colectivas.

Bibliografía recomendada

- Albritton, Vicky y Albritton Jonsson, Fredrik (2016) *Green Victorians: The Simple Life in John Ruskin's Lake District*, Chicago: University of Chicago Press.
- Chase, Malcolm (2003) "'Wholesome Object Lessons': The Chartist Land Plan in Retrospect", *The English Historical Review* 118: 59-85.
- Hardy, Dennis (1979) *Alternative Communities in Nineteenth Century England*, Londres: Longman.
- Linehan, Thomas (2012) *Modernism and British Socialism*, New York: Palgrave Macmillan.

NOTA SOBRE EL AUTOR

Álvaro Sevilla-Buitrago es catedrático de urbanismo en la Universidad Politécnica de Madrid. Su trabajo presta especial atención a la influencia de la urbanización, el diseño y las políticas urbanísticas en las dinámicas de cambio social. Es autor de más de cincuenta publicaciones, entre las que cabe destacar su libro *Contra lo común: una historia radical del urbanismo* (Alianza, 2023).

LA LLUITA JURÍDICA EN DEFENSA DEL TERRITORI, MÉS ENLLÀ DE LA TRINXERA

ANA DE SOUSA

Quan parlem de defensa del territori, i ho fem des d'una perspectiva jurídica, parlem, quasi sempre, de resistència davant projectes concrets. La faena majoritària dels i les advocades ambientalistes que ens dediquem a la defensa i preservació del territori i el medi ambient és la de donar acompanyament tècnic a agrupacions de la societat civil que, a conseqüència de l'existència d'un projecte, veuen amenaçat el seu territori.

Aquesta feina de defensa del territori la fem en un context definit per una agenda d'urgències. D'una banda, trobem la urgència ansiosa, la denominada urgència de l'ecoansietat... És aquesta la urgència que bona part de la societat sentim quan pensem en la crisi climàtica, la destrucció de la capa d'ozó, la pèrdua accelerada i irreversible de biodiversitat, la contaminació química acumulada al nostre planeta, l'acidificació dels oceans, la pèrdua d'un recurs escàs i no renovable com és el sòl fèrtil o l'escassetat d'aigua dolça.

Però, juntament amb aquesta urgència, en trobem d'altres. Identifiquem la urgència cobdiciosa d'un capital que es mou sempre buscant el màxim i més ràpid benefici, i que veu una oportunitat

de negoci en allò que hem denominat la transició energètica. Al costat de les preses del capital, trobem també la urgència desmanyotada d'un poder polític que pren decisions i legisla i que no sabem ben bé si vol però no pot, pot però no sap, o ni sap, ni pot ni vol. En aquest context d'emergència és que, des dels moviments organitzats de la societat civil en defensa del territori, i des dels i les professionals que treballem aportant coneixement tècnic a aquesta defensa (jurídic o tècnic), necessitem resistir i no veure'ns arrossegades per aquestes preses.

L'objectiu d'aquest text és el de destacar i valorar estratègies jurídiques que, de manera complementària al que hem anomenat l'estratègia de la resistència de trinxera, la resistència "projecte a projecte", puguem apropar-nos més a canviar

la realitat. A continuació parlarem d'aquelles vies que el dret ofereix per a poder expulsar de l'ordenament jurídic totes aquelles normatives que considerem que afecten de manera negativa al medi ambient, desprotegint el territori i que, lluny de ser part de la solució que necessitem, agreugen els problemes als quals ens enfrontem. Parlarem doncs de les possibilitats de plantejar un control constitucional sobre totes aquelles normatives que considerem, tenen efectes regressius sobre la protecció del territori i del medi ambient.

Als darrers anys estem assistint, producte d'aquestes urgències de què parlàvem, a un allau de normativa (disposicions generals amb rang de llei) l'objectiu de les quals és afavorir un règim jurídic favorable al desenvolupament de les energies renovables. En concret a l'Estat espanyol s'ha fet una aposta decidida per atraure inversions, tant nacionals com estrangeres, que impulsen la implantació de centrals de producció elèctrica fotovoltaica i eòlica.

Aquesta adaptació del règim jurídic ha consistit principalment, i gairebé de manera exclusiva, a afeblir els règims de protecció ambiental i del terri-

tori. El poder polític ha incorporat a la seua agenda, fent-lo propi, el relat generat pel capital interessat a fer negoci amb la transició energètica. Aquest relat adoleix del que s'ha denominat *carbon tunnel vision* (visió de túnel de carboni). Aquest concepte fa referència a una forma d'observar i analitzar les problemàtiques ambientals que sistemàticament i de manera esbiaixada se centra únicament en la reducció d'emissions de CO₂, minimitzant i en ocasions negant la resta de problemàtiques ambientals. És des d'aquesta perspectiva que el poder polític ha legislat als últims anys, i és aquest el motiu pel qual assistim a una ofensiva generalitzada que posa en risc el territori baix l'amenaça de dur a terme projectes d'implantació de renovables, sense tindre en compte el cost que això té sobre el medi ambient, particularment sobre la biodiversitat i sobre la utilització de sòl fèrtil. Davant aquesta realitat, des de la societat civil tenim ferramentes per a tractar d'incidir políticament, i és necessari que les coneguem.

El control judicial de les disposicions normatives amb rang de llei, és un control (control de constitucionalitat) que només pot realitzar el

Vista de la Huerta de Valencia. Burjasot. Foto: Txetxenia, en Wikimedia.



Tribunal Constitucional. Aquest control jurídic de la normativa és una qüestió que, tot i ser jurídica, té una dimensió clarament política. Aquest és el motiu pel qual, tenint en compte la separació de poders que regeix al nostre estat i sent conscients que aquesta separació de poders és un dels principis bàsics de la nostra democràcia, aquestes vies de control jurisdiccional d'allò legislatat tenen un procediment d'accés amb uns requisits molts concrets i que limiten les possibilitats d'activació dels mateixos. Les possibilitats que tenim, com a societat civil o bé com a particulars, d'impulsar un control de constitucionalitat de les normatives són tres: el recurs d'empara, el recurs d'inconstitucionalitat i la qüestió d'inconstitucionalitat.

Pel que fa a la primera via, el recurs d'empara, hem de tindre en compte que aquest recurs té un caire personal, ja que està pensat per a ser activat per persones particulars que han vist els seus drets fonamentals afectats. Aquesta opció és l'opció més directa que la ciutadania té per a impugnar normativa amb rang de llei, però trobem, com a requisit per a poder utilitzar-la, que cal demostrar que ha existit vulneració d'un dret fonamental a una persona en concret i que ha de ser aquesta la que interpose el recurs d'empara. En aquest sentit, hem de recordar que l'article que a la Constitució arreplega el dret al medi ambient, no és un dret fonamental. Tot i açò, no vol dir que aquesta via siga impossible. Existeixen ja exemples de jurisprudència on, mitjançant el recurs d'empara s'han protegit drets fonamentals i indirectament drets ambientals establint la relació entre ells (per exemple el cas López Ostra). En qualsevol cas, pensem que aquesta no és la via més adient per a la resistència col·lectiva tal com s'està plantejant en aquest article, i atenent a la realitat dels moviments socials i entitats organitzades per la defensa del territori i del medi ambient al nostre entorn.

Deixant de banda aquesta primera via, tenim dues altres opcions. La primera és el recurs d'in-

constitucionalitat. Per a poder activar aquesta via de revisió, la legislació ens identifica només a uns subjectes concrets com a legitimats per a fer-ho: defensor del poble, president/a del govern, cambres legislatives de les comunitats autònomes i agrupació d'almenys 50 senadores o diputats. Perquè aquesta via pugui ser activada per entitats de la societat civil, cal que les entitats incorporen entre les seues activitats la pressió política i l'actuació com a *lobby*. Un exemple d'èxit d'aquesta via és la recent campanya de pressió que l'associació *Per l'Horta* va fer, d'una banda, demanant al *Defensor del pueblo* que presentara un recurs i, d'altra, parlant amb partits polítics per a sumar els 50 diputats necessaris. Finalment el recurs es va presentar i actualment el Tribunal Constitucional està pendent de resoldre sobre la constitucionalitat o inconstitucionalitat de la darrera modificació de la *Llei de l'Horta* valenciana.

Per últim, trobem l'opció de la qüestió d'inconstitucionalitat. Aquesta és una via que només pot activar-se una vegada que hi ha un procediment judicial en marxa. En aquesta opció, la feina ha de ser conjunta entre els i les advocades de les entitats i aquestes. Es tracta de poder fer una selecció d'aquells casos que podent-se judicialitzar resulten estratègics per a poder plantejar que l'aplicació d'eixa legislació vulnera els drets ambientals. En aquesta via és finalment el tribunal davant el qual s'està duent el procediment principal qui valora i decideix si eleva la qüestió constitucional o la rebutja. Pense que en qualsevol cas, el nostre camí, com entitats de defensa del territori i el medi ambient, és intentar totes les vies possibles. Anem a continuar resistint contra cada projecte i defensant cada pam de terra, però no és suficient, ho volem tot. Necessitem ampliar la dimensió i l'abast de la nostra estratègia de defensa i preservació del territori i el medi ambient, cal que problematitzem la normativa que està ordenant l'anomenada transició energètica. Cal prendre la paraula a l'hora de decidir el nostre futur.

NOTA SOBRE LA AUTORA

Ana de Sousa Selfa. Sociòloga, politòloga y abogada especializada en derecho administrativo, en concreto, derecho ambiental y urbanístico. Ejerce actualmente la abogacía como socia de la Cooperativa de abogacía y mediación El Rogle. Forma parte de RADA (Red de Abogados/as para la Defensa Ambiental). En la actualidad participa activamente en asociaciones y colectivos de defensa del medio ambiente y el territorio como *Per l'Horta*, entre otros.

ARTICULAR LA ACCIÓN POPULAR

NACHO COLLADO

En las últimas décadas, y de manera habitual, la acción de los movimientos sociales se ha venido legitimando como la única genuinamente democrática. Aquella que, alejada de las impurezas del ejercicio del poder político, recoge la voluntad popular para arrojarla a la cara de aquellos que nos gobiernan.

Mosaico de individuos que crean una estructura compleja. Foto: Nacho Collado.



Sin embargo, y aunque la proliferación de diferentes luchas particulares se ha mostrado como una forma muy capaz de impugnar, atenuar o confrontar algunas cuestiones del *statu quo*, no lo han sido tanto a la hora de articular respuestas complejas a problemas complejos.

No ha sido una opinión unívoca. También los ha habido que han cargado de manera descarnada contra las formas de asociacionismo propio de los movimientos sociales. Las críticas han sido, en muchos casos, furibundas y poco constructivas. Aproximaciones esencialistas y, en muchos casos, nostálgicas, han impedido generar debates constructivos. Algunas de las críticas no han sido sino regresiones ortodoxas que miran hacia antiguas organizaciones idealizadas; el retorno a principios de jerarquía, centralización; la priorización de unas opresiones sobre otras; la identificación de estos movimientos con intereses partidistas determinados; y una vuelta a la clásica, y estéril, confusión entre reforma y reformismo.

Aun con todo, parece que la autorganización popular antagonista continúa acelerándose. El movimiento por la vivienda protagonizó el año pasado movilizaciones históricas. Durante algún momento se llegó a hablar incluso de la posibilidad de un nuevo “15M”. Ahora, la defensa internacionalista de la causa palestina ha generado una convulsión política y social en todo el mundo. También dentro de las fronteras del Estado español. Esta, además, adopta estrategias nuevas. Confederaciones interseccionales, sindicatos de inquilinas o coordinadoras por el derecho a la ciudad, surgen en –y entre– diferentes ciudades. Existe una pulsión clara hacia la articulación, pero

hay que preguntarse si esa voluntad será suficiente para superar ciertas dinámicas atomizadoras. Y, además, si se podrá hacer escapando de esas propuestas más nostálgicas que comentábamos antes.

Hoy, al menos en València que es desde donde se escribe este artículo, encontramos una gran diversidad de agentes intermitentes que, desde las zonas urbanas con cierta consolidación, intentan subvertir el *statu quo* actual. Algunos de ellos lo hacen, además, con cierta voluntad de coordinarse, pero, hasta el momento, sin capacidad para consolidar una articulación real. Estas experiencias son diversas, están cargadas de buenas intenciones y sus objetivos son completamente legítimos y justos. Pero seguramente esto, que es necesario, no sea suficiente.

Para enfrentarnos a un mundo complejo, a un metabolismo holístico, hacen falta planteamientos integrales. La autonomía de las diferentes perspectivas ayuda, y mucho, a abarcar y a crear espacios de resistencia que serían imposibles de otra manera. Pero debemos conjugar la diversidad con la planificación estratégica. Subvertir un sistema injusto, transformar nuestro mundo, crear un horizonte de emancipación requiere más que un sinfín de luchas acumuladas. Requiere de su articulación y de la cooperación de estas. Debemos, lo antes posible, aprender a cooperar, a entretrejer el lugar de trabajo con el hogar, interseccionar las miradas. Lucha sindical junto a creación comunitaria. Defensa del territorio y vivienda digna. Soberanía energética e implementación justa. La reforma transformadora y la emancipación social. Hasta entonces nos será imposible imaginar un mundo nuevo.

NOTA SOBRE EL AUTOR

Nacho Collado Gosálvez és advocat, investigador i soci d'El Rogle, Mediació Recerca i Advocacia, una cooperativa valenciana dedicada a la defensa del dret a l'habitatge i a la ciutat. Té Màster de Ciutat i Urbanisme (UOC) i altre en mediació. Estudia filosofia a l'UNED i desenvolupa un doctorat a la Universitat de València. Participa a diversos col·lectius pel dret a la vivenda i a la ciutat, com Entrebarris, a València. El Rogle forma part de l'equip de assessors de Crítica Urbana. <https://elrogle.es>

GALES: LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS GENERACIONES FUTURAS

NEUS CASAJUANA

Presentamos en este artículo la experiencia de Gales, que aprobó en 2015 la Ley de Bienestar de las Generaciones Futuras y creó una nueva institución: el Comisionado para el Bienestar de las Generaciones futuras, cuya responsabilidad es representarlas y defenderlas delante de los gobiernos y las administraciones cuando sus actuaciones pueden significar un perjuicio para ellas.

La creación de esta ley se enmarca dentro de las iniciativas que han ido surgiendo en todo el mundo a lo largo de los últimos 50 años, para dar respuesta a las múltiples problemáticas que afectan a los derechos básicos de las personas y que los gobiernos no sólo no han sido capaces de resolver, sino que han contribuido a empeorar algunas de ellas, como es el caso de la desigualdad, la inseguridad o el cambio climático, que se ha convertido en una verdadera bomba de relojería.

Citamos algunas de las declaraciones más célebres que han pretendido ser una guía para los gobiernos del mundo delante de estos retos sociales, económicos y ambientales: el Informe Brundtland de 1987, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, la “Agenda del Milenio” de 2000, la Agenda 2030

y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, de 2015 o el Pacto del Futuro de 2024, todos ellos publicados por la ONU. El Pacto del Futuro hace ya una clara referencia a la necesidad de preservar y defender el bienestar de las generaciones futuras, dado que cada vez es más evidente que las políticas de los gobiernos están poniendo en riesgo sus derechos fundamentales, entre ellos el derecho a vivir en un clima favorable. Hacemos también mención de algunos países que han tenido iniciativas dirigidas a los mismos fines, como Hungría o Israel, que fracasaron en su intento, u otros como Japón o Finlandia que están abriendo caminos.

¿Qué tiene de especial la ley de Gales?

El proceso de creación de la ley fue un proceso muy participado por la sociedad galesa. En 2014,

el ministro de las Comunidades y la Lucha contra la Pobreza de Gales, invitó a todos los ciudadanos a participar en una “conversación nacional” para llegar a un consenso sobre qué medidas tomar para hacer frente a los desafíos del país. El objetivo último era establecer un plan de acción a largo plazo y mejorar la gobernanza. Para ello era necesario entender, previamente, las vulnerabilidades que podían afectar a los ciudadanos en el futuro y también las oportunidades.

Con este propósito, se organizó esta consulta nacional en la que se involucraron 7.000 personas a través de sus redes sociales, comunidades y agrupaciones. Participaron más de 200 asociaciones, además de hacer uso de las plataformas online. Se utilizaron diferentes métodos de participación

destinados a diferentes sectores de población, desde niños y jóvenes, hasta gente mayor, sectores profesionales o académicos. Se movilizaron un centenar de *champions* o voluntarios que impulsaron estos procesos de participación, invitando al debate y recogiendo las aportaciones de sus participantes. La pregunta clave para todos ellos era que “definiesen el Gales que querían para sus hijos y sus nietos, el Gales del futuro”.

Las conclusiones de esta conversación nacional se publicaron en el informe *El Gales que queremos. un informe en nombre de las generaciones futuras* y se pueden resumir en los siguientes puntos:

- El cambio climático se consideró el problema más crítico que enfrentan las generaciones futuras.

Barmouth Beach, Barmouth, UK, Foto: Anthony, en Unsplash, 2023.



- El medio ambiente, el empleo, la educación y la salud son de suma importancia para el bienestar de las generaciones futuras.
- Es importante tener un sentido de responsabilidad y apropiación de los objetivos a largo plazo y su consecución.
- Cada objetivo del proyecto de ley no debe considerarse de forma aislada, sino que debe implementarse como parte del conjunto.
- Los objetivos deben respaldarse con medidas y parámetros de progreso claros.
- Los objetivos deben establecer una visión y un enfoque comunes para el liderazgo colectivo, con acciones a todos los niveles y en todos los sectores.

A partir de esta Conversación Nacional se definieron los objetivos que han contribuido a establecer las metas de bienestar para todas las administraciones de Gales y se sentaron las bases de la ley. El Informe *El Gales que queremos* fue el precursor del reglamento que guía las acciones del Comisionado para las Generaciones Futuras. El Parlamento de Gales definió los siete pilares para el bienestar de las generaciones futuras.

Los siete pilares para el bienestar de las generaciones futuras

1. Los niños necesitan tener el mejor comienzo en la vida desde sus primeros años.
2. Las futuras generaciones necesitan comunidades prósperas basadas en un fuerte sentido de pertenencia.



3. Vivir dentro de los límites ambientales globales, gestionar nuestros recursos eficientemente y valorar nuestro medio ambiente es fundamental.
4. Invertir en el crecimiento de nuestra economía local es esencial para el bienestar de las futuras generaciones.
5. El bienestar de todos depende de la reducción de la desigualdad y de un mayor valor de la diversidad.
6. Una mayor participación en el proceso democrático, una voz ciudadana más fuerte y una participación activa en la toma de decisiones son fundamentales para el bienestar de las futuras generaciones.
7. Celebrar el éxito y valorar nuestro patrimonio, cultura e idioma fortalecerá nuestra identidad para las futuras generaciones.

¿Qué resultados ha dado la ley de Gales en sus 10 años de recorrido?

Se pueden ya apreciar algunos resultados positivos de la ley: Gales se ha convertido en un líder mundial en términos de tasas de reciclaje, está poniendo a prueba un plan de Renta Básica para sus jóvenes más vulnerables, ha incrementado el número de personas involucradas en las decisiones de la comunidad, los jóvenes pueden votar a partir de los 16 años..., pero, de todos los proyectos que se están desarrollando, destacamos las actuaciones en el campo de la movilidad.

Sabemos que el vehículo particular es un símbolo de estatus social y una promesa de libertad, pero también, en muchos casos, es un objeto imprescindible cuando el transporte público no cubre las necesidades de la gente. El coche particular ha conformado el modelo de movilidad, sobre todo en los países occidentales, donde la mayoría de familias de clase media disponen al menos de uno. Los gobiernos de estos países han diseñado la movilidad poniendo el foco en el vehículo privado. La consecuencia ha sido un incremento muy importante de la red viaria que, en no pocos casos, ha relegado a un segundo plano el transporte público, el medio utilizado por la población más vulnerable. Pero este modelo se ha empezado a poner en tela de juicio a medida que los problemas de contaminación, accidentabilidad,

salud y, ante todo, el cambio climático, se han hecho más evidentes.

El Gobierno de Gales, ha sido capaz de tomar un cambio de rumbo hacia la movilidad sostenible. Ha revisado su Plan Nacional de Transporte para hacerlo compatible con los requisitos medioambientales y climáticos. Los principales proyectos de construcción de carreteras en Gales han sido descartados por cuestiones ambientales. A cambio, se ha impulsado el transporte público y la movilidad activa. Este cambio de modelo ha sido el resultado de aplicar la Ley del Bienestar de las Generaciones Futuras. El Comisionado que las representa, pidió a los políticos que explicaran cómo la construcción de una nueva autovía que estaba en proceso de aprobación, iba a mejorar el bienestar de las generaciones futuras en todas sus facetas: económica, social, ambiental, climática cultural, de salud... Esta pregunta fue el detonante que impulsó el cambio de modelo de movilidad que ha supuesto un hito y un ejemplo a seguir para los países que todavía están anclados en el modelo de la movilidad fósil y el vehículo privado.

En España también necesitamos una ley y un comisionado para defender los derechos de las generaciones futuras

También en España existen organizaciones que trabajamos para conseguir una ley y un comisionado como el de Gales. El Parlamento de Baleares, a través de una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por la asociación ambientalista GOB, aprobó la Ley de Bienestar para las Generaciones Presentes y Futuras. Lamentablemente el criterio del Gobierno actual no coincide con el propósito de la ley y, en consecuencia, no la ha implantado.

Actualmente está creciendo una alianza de organizaciones diversas, con el objetivo común de conseguir una ley y un comisionado que defienda los derechos de las generaciones futuras delante de las actuaciones cortoplacistas de gobiernos y administraciones. Solo teniendo en cuenta los efectos a largo plazo de las decisiones políticas vamos a ser capaces de encontrar una salida a los problemas sociales, ambientales y climáticos que nuestro modelo de vida insostenible e injusto está provocando.

NOTA SOBRE LA AUTORA

Neus Casajuana Filella es bióloga y farmacéutica por la Universidad de Barcelona. Activista. Ex presidenta de Revo Prosperidad Sostenible.

ATREVERSE A PENSAR FORA DOS MARCOS

DAVID ESPERÓN

A Rede para o Decrecemento de Galicia, Eo-Navia e o Bierzo leva oito anos cuestionando un sistema depredador mediante iniciativas como o Día Internacional polo Decrecemento ou o traballo de incidencia política no Parlamento de Galicia.

Formamos parte da primeira xeración con plástico aloxado no cerebro. En concreto, uns 4.763 $\mu\text{g/g}$ ¹. Unha cantidade que se ven incrementando nos últimos anos, un 40% entre 2016 e 2023. A nosa fascinación polos combustibles fósiles levounos a espaxer microplásticos ata nas áreas máis remotas do planeta, a Antártida, a cima do Everest ou a fosa das Marianas. No noso corpo atopáronse microplásticos, ademais de no cerebro, no fígado, os riles, o seme ou o leite materna.

Esta é unha representación gráfica da grave crise ecolóxica na que nos atopamos inmersos. Seis dos nove límites biofísicos que definen o espazo operativo seguro para a existencia da humanidade no planeta foron sobrepasados: o cambio climático, a sexta extinción masiva, a crise da auga doce, a contaminación química, a deforestación masiva ou a perturbación dos ciclos do nitróxeno e do fósforo completan a panorámica da actual catástrofe ecolóxica².

O auxe da extrema dereita prodúcese neste contexto de catástrofe ecolóxica, crise de recursos e incremento da desigualdade. Ante a desesperanza e a frustración, a extrema dereita propón

unha receita sinxela: culpar ao pobre, ao migrante, ao marxinado... mais non ofrecen nada novo. As súas propostas políticas son vellas coñecidas: recortar dereitos, adelgazar ao Estado,...

A extrema dereita representa o cumio do negacionismo climático. Trump ou Milei non se limitan a negar que o clima estea cambiando, a demostrar que ese tipo de cambios sempre se produciran de forma natural ou a exculpar de responsabilidades á industria fósil. Directamente deixan sen recursos ás axencias estatais que investigan a problemática medioambiental. Pretenden eliminar a evidencia científica ao mesmo tempo que intensifican a represión contra os migrantes. Desvían o foco de atención para que o clima ocupe o último lugar da nosa lista de preocupacións inmediatas.

Por outra banda, o “establishment” –a dereita liberal e, especialmente, a socialdemocracia– recoñecen o cambio climático como un problema aínda que confían na tecnoloxía para acadar os obxectivos climáticos sen renunciar ao crecemento económico.

O Acordo de París de 2015 representa un fito histórico desta aproximación. En París definiuse

a estratexia que ía permitir conxugar sostibilidade e crecemento económico: a electrificación da economía –especialmente a mobilidade–, a aposta polas enerxías renovables, a bioenerxía ou a nuclear.

Estes son os marcos de pensamento que temos ao noso alcance para interpretar a crise ecolóxica –máis complexa que unicamente o problema do cambio climático– e para afrontala: negacionismo puro ou un problema solucionable con máis tecnoloxía. En calquera caso, ningunha das opcións cuestiona o crecemento económico continuado.

Mais a física impónse á política. Os nosos cerebros plastificados alcanzan a comprender unha realidade física incuestionable: é imposible que a economía creza de forma ilimitada nun planeta que é finito.

As resistencias a frear o crecemento económico son comprensibles: os que máis contaminan son, ao mesmo tempo, os principais beneficiarios do actual sistema económico.

Segundo Intermon-OXFAM, as emisións dun milmillonario superan en máis dun millón de veces as de calquera persoa corrente³. No mesmo informe sinalan que entre 2020-2023 o 1% máis

rico da poboación mundial acaparou case dous terceiras partes da riqueza xerada, case o dobre que o restante 99% da poboación.

O 1% máis rico da poboación mundial non só ten unha responsabilidade directa na cantidade de emisións que anualmente se producen senón que son especialmente responsables da catástrofe ecolóxica por ter influído na economía, a política e os medios de comunicación para que non cambie un sistema que lles beneficia⁴.

Nas últimas dúas décadas os representantes de *lobbies* dos combustibles fósiles asistiron a máis de 7.000 negociacións sobre o clima para impedir que se tomaran decisións que afectaran aos seus intereses⁵. Só na COP 28 celebrada en 2023 en Dubai estiveron presentes máis de 2.400 *lobistas* dos combustibles fósiles, sector que estivo máis representado que a suma de delegados das dez nacións máis afectadas polo cambio climático⁶.

É difícil pensar fora dos marcos, especialmente cando tódalas institucións e medios de comunicación repiten a diario o mantra do crecemento económico continuo, a pesar de que sabemos que maior PIB non sempre significa maior benestar⁷.

Rolda de prensa no exterior do Parlamento de Galicia. 28 de maio de 2025. Foto: el autor.



A Rede para o Decrecemento leva oito anos atrevéndose a pensar fora dos marcos dominantes e organizando actividades –entre elas dous Congresos– para concienciar sobre a crise ecolóxica e sobre o declive da produción dos recursos finitos do planeta, especialmente os enerxéticos e os mineiros⁸.

A outra vertente do traballo da Rede é crear sinerxías entre organizacións locais con principios decrecentistas –aínda que elas non sempre lles chamen así– para crear e visibilizar unha alternativa social, económica e cultural que conforme unha sociedade decrecentista. O gran reto do século XXI será crear un sistema, alternativo ao capitalista, que nos permita vivir con dignidade dentro dos límites biofísicos do planeta.

A Rede para o Decrecemento ven dous anos impulsando o 12 de xaneiro como Día Internacional polo Decrecemento. Nesta data se conmemora o nacemento de Serge Latouche, economista e filósofo francés e un dos principais ideólogos do Decrecemento. Ademais, é unha oportunidade para concienciar, festexar e mobilizarnos. En 2025 o Día polo Decrecemento celebrouse en Betanzos, en Vigo ou en Carballo, no Casino, cunha Feira polo Decrecemento que se alongou durante toda a xornada.

Si en xaneiro celebramos o Día polo Decrecemento, en maio acompañamos a Antonio Turiel –científico do CSIC e coñecido divulgador– a reunións con tódolos grupos políticos presentes no Parlamento galego. Unha labor de incidencia política para transmitir a gravidade da situación na que nos atopamos e a urxencia de tomar medidas. En paralelo, organizamos actividades en Coruña, Carballo ou Compostela onde colectivos, movementos sociais, representantes sindicais e persoas interesadas puideron escoitar a este coñecido científico.

Existen grupos locais da Rede para o Decrecemento en Betanzos, en Ferrol, en Carballo, en Vigo, na Veiga-Vegadeo, en Negueira de Muñiz, en A Teixeira (Ribeira Sacra) e en Ourense, nos que colaboran, de xeito habitual ou esporádico, máis de 50 persoas. Grupos aos que podes sumarte escribindo ao mail da Rede que podes atopar ao final deste artigo.

“Ao principio dicíamos: hai moita xente que é decrecentista aínda que non o sabe. Agora vemos como moitos movementos sociais incorporaron o discurso decrecentista. Este é o principal logro da nosa organización”. Resume Miguel Anxo Abairas, presidente da Rede para o Decrecemento de Galicia, Eo-Navia e o Bierzo.

Por diante, dous obxectivos: incorporar máis organizacións do territorio para organizar mobilizacións conxuntas e seducir a organizacións de fora do noso territorio para que celebren canda nós o Día internacional polo Decrecemento.

Máis información en:

www.redeparaodecrecemento.com

redeparaodecrecemento@gmail.com

Notas

1. <https://www.elsaltodiario.com/plastico/nanoplasticos-cerebros-aumento-ocho-anos>
2. Richardson et al.,(2023). La Tierra más allá de seis de los nueve límites planetarios. Science Advance.
3. OXFAM (2023). La ley del más rico.
4. Se se quere afondar en como unhas poucas persoas, moi influentes, conseguiron deter a contestación social ante a evidencia crecente da catástrofe ecolóxica dous libros pagan especialmente a pena:
 - Oreskes N., Conway E. (2018). Mercaderes de la duda. Capitan Swing
 - Malm, A. & Colectivo Zetkin (2022). Piel blanca, combustible negro. Capitan Swing.
5. <https://elperiodicodelaenergia.com/presencia-lobbies-petroleo-cop-obstruye-negociaciones-climaticas/>
6. <https://www.rtve.es/noticias/20231205/cop28-dubai-record-lobistas-empresas-energias-contaminantes/2464627.shtml>
7. Hickel, Jason. (2023). Menos es más: Cómo el decrecimiento salvará al mundo. Capitán Swing.
8. Por exemplo, o pico de produción do petróleo cru convencional que AIE recoñeceu que superamos en 2006. WEO 2010 P. 43

NOTA SOBRE O AUTOR

David Esperón Fontán. Sendo adolescente ilusionoume ver aos líderes mundiais reunidos en Río de Xaneiro dispostos a frear as emisións de CO₂. Cumio tras cumio impúxose o esmagador peso da realidade ao tempo que a esperanza atopaba refuxio nas pequenas e diversas organizacións da Economía Social e Solidaria. Son membro activo da Rede para o Decrecemento, así como da REAS Galicia.

ACTIVISMO AMBIENTAL EN CHILE

PILAR VALENZUELA

Generalmente el activismo se ve como una amenaza al cuestionar el statu quo y poco se reconoce como una forma necesaria y legítima de expresión democrática, que permite generar cambios y poner en discusión pública temas contingentes y a menudo difíciles. Mucho del activismo está en la frontera de los avances sociales, buscando lo que debe cambiar por algo que aún no existe. Es el caso de las mujeres que lograron el voto, el derecho a que sus hijos no sean ilegítimos o el fin de la esclavitud.

En el activismo ambiental ocurre lo mismo, no es solo el detener un proyecto de inversión, a lo que muchas veces lo reducen; es visualizar las necesidades sociales o el patrimonio natural que no se están tomando en cuenta. Poner sobre la mesa catástrofes en ciernes que las miradas cortoplacistas esconden. Todos los activismos son una parte fundamental de la participación democrática, que ponen sobre relieve las legítimas diferencias de opinión y desenmascaran las desigualdades de poder.

El activismo ambiental en Chile es difícil y a veces hasta peligroso, como en el resto de América Latina. La defensa de la naturaleza es una disputa que, en general, se topa con la urgencia con que se plantea el desarrollo económico, el cual es casi un

dogma que ve en los movimientos ambientales una importante limitante. El activismo ambiental, por tanto, desafía directamente al poder, entra en una pugna por el territorio y, si bien no es su objetivo, limita o complejiza proyectos de inversión.

Proteger Tupungato

En Chile, buena parte del activismo ambiental se da en torno a detener grandes proyectos de alto impacto y connotación pública, como los emblemáticos casos de Hidroaysen, proyecto de construcción de cinco grandes represas en la Patagonia Chilena, o el mega puerto Dominga, que pretende instalarse en una zona costera de mucha biodiversidad. También hay activismo que promueve una propuesta de conservación, como lo son las campañas por la protección de espe-

cies o de territorio. Ejemplo de ello es la campaña ciudadana *Queremos Tupungato*, que desde el año 2019 busca que un gran territorio fiscal de 142.000 ha en la región más poblada del país, sea destinado a una gran área protegida.

Queremos Tupungato (antes se llamó Queremos Parque) es una campaña atípica; no comienza en un conflicto. Busca definir el destino de un territorio antes de que las empresas mineras o intereses inmobiliarios definan el destino del predio fiscal más valioso que hay en Chile. La campaña propuso crear un gran parque; aboga por que el territorio sea destinado a una gran área protegida del Estado desde abril de 2019, cinco años antes de que entrara a evaluación ambiental el proyecto minero de yeso Rubí de la empresa Knauf. En agosto de 2023 la campaña logra la creación del Parque Nacional Glaciares de Santiago, protegiendo cerca de 75.000 ha ubicadas por encima de los 3.600 metros sobre el nivel del mar, pero dejando sin protección cerca de 70.000 ha en la zona de valles, el área más rica en biodiversidad y a la que tendrían acceso las personas. El gobierno prometió públicamente, en junio de 2024, ampliar la protección a la zona más baja; sin embargo, hasta ahora aún no se ha concretado.

Las represas de Patagonia

El caso del activismo contra Hidroaysén fue emblemático por lo gigantesco del proyecto y por la importante respuesta ciudadana que se opuso, a pesar de localizarse en una región lejana a los centros poblados del país. Hidroaysén fustigó con su proyecto con una decisión implacable. Compraron programas de radio locales, avisos camineros, pusieron personas de su confianza en todas las juntas de vecinos, no había reunión en la región en que no participaran personeros de la empresa. Por su lado, las ONG ambientales se agruparon en la campaña Patagonia sin Represas y contaron con un importante apoyo y financiamiento de Douglas Tompkins; lograron tener avisos carreteros por todo el país, pagaban insertos de página completa en importantes diarios de circulación nacional, contaron con apoyos de celebridades y mucho apoyo ciudadano.

Las ONG ambientales ya había sufrido previamente una gran derrota frente a megarepresas que se instalaron en el río Biobío desplazando a poblaciones indígenas locales. Los impactos de las represas ya eran conocidos y para la ciudadanía no eran tolerables en una región reconocida por su naturaleza, como Aysén; las cinco megarepresas,

Humedal altoandino en el valle del Río Colorado, enero, 2020. Foto: Pilar Valenzuela.



todas las obras acompañantes, y la población flotante que llegaría, provocarían un cambio radical en el paisaje y los estilos de vida locales.

La empresa acusaba que el país se quedaría sin luz, financiaba avisos televisivos en los que el país quedaba a oscuras. Las ONG se organizaban y disputaban que la energía debía crecer con fuentes solares, y traían a Chile a importantes referentes en temas de energía para intentar convencer al Gobierno de que era posible. Los gobiernos y la empresa señalaban que era imposible abastecernos con energía solar. Fue el comienzo del cambio de la matriz energética chilena y que hoy posiciona a Chile como el país con mayor crecimiento de la energía solar en el mundo. Hay 10,680 MW de potencia fotovoltaica instalada, el 30% de la energía que utiliza el país es abastecida por plantas solares, algo que era impensable antes de Hidroaysén. Sin embargo, la ciudadanía perdió todas las batallas legales, el proyecto se aprobó el 2011 y podría haberse construido, pero políticamente se hizo inviable, y es rechazado en forma definitiva el 2014. Cuando acabó, la empresa había gastado 250 millones de dólares y el sistema de evaluación ambiental había fallado; desde el comienzo de la realización del estudio de impacto ambiental, presentado el 2006, habían pasado más de 10 años. La disputa había sido demasiado larga, costosa y estaba desacreditado el sistema.

Aprender de las experiencias

Lo ocurrido con Hidroaysén y Patagonia sin Represas, fue una de las causas de que se modificara el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el año 2012. Sin embargo, no se cambió la esencia de la desigualdad que enfrentan los movimientos ambientales. Cuando una empresa diseña un proyecto, define sin consultar las dos principales cuestiones que determinarán la magnitud de los impactos ambientales: la localización y la ingeniería. Es decir, define dónde se localizará su proyecto, qué tipo de ecosistema o sistema de vida va a afectar, y con qué tipo de ingeniería. El Estado y la ciudadanía en nada participan de estas decisiones: la decisión la toma únicamente el dueño del proyecto. Si el citado Puerto de Dominga se instala en una zona de surgencias marinas donde se alimentan ballenas y delfines, es decisión de la empresa, no existe una evaluación de alternativas, mucho menos de la real necesidad del proyecto. Si un proyecto hidroeléctrico define utilizar muros de 200m de altura, o turbinar con sistema de pasada, con tal o cual turbina, o perforar kilómetros de túneles para reunir agua de varios ríos, es decisión solo de la empresa.

Una vez definido el proyecto en todo su detalle, se hace un estudio de impacto ambiental que se presenta al Ministerio de Medio Ambiente para su aprobación o rechazo. Nadie evalúa si el proyecto es pertinente o no, si el país realmente lo necesita, si se justifica. El proceso de evaluación puede sugerir mejoras en la definición de los impactos o en las mitigaciones o compensaciones, pero no puede intervenir sobre la localización o la ingeniería del proyecto, menos sobre la pertinencia. La participación ciudadana, que está definida legalmente, permite opinar, preguntar, conocer el proyecto, pero no lo puede modificar ni discutir en el fondo. Es una participación ciudadana que no permite negociación, no hay nada relevante que negociar. Es sumamente engorroso que el proyecto se modifique, cualquier modificación implica que se debe comenzar todo el proceso de evaluación nuevamente y realizarse una nueva evaluación de los impactos.

Evaluar los impactos ambientales es una tarea sumamente difícil. La naturaleza con sus múltiples dimensiones es difícil de predecir y la biodiversidad que nos acompaña es desconocida en muchos sentidos. No terminamos de conocer el cuerpo humano, mucho menos sabemos cómo va a evolucionar un ecosistema, si se va a adaptar o no a nuevas circunstancias, si una determinada especie logra adaptarse o desaparece, no hay certezas. Es por ello que la evaluación ambiental debe ser precautoria, ante la duda abstente, y asegurar que el patrimonio común no será afectado mayormente, integrando la mejor información disponible a la toma de decisiones, así como procurar un manejo adaptativo ante impactos ambientales no previstos.

El SEIA está hecho para que las empresas puedan ver aprobados sus proyectos; sin embargo, el riesgo es alto. Al no permitirse modificación alguna las empresas juegan al todo o nada, o les aprueban lo que definieron o es rechazado. Es un sistema poco democrático, sin instancias reales de participación y negociación. En resumen, la evaluación ambiental en Chile carece de cuatro aspectos esenciales: evaluar la pertinencia de un proyecto, las alternativas de localización, las diversas posibilidades de ingeniería, y una participación ciudadana con reales posibilidades de influir.

Otra de las grandes dificultades que enfrenta la ciudadanía es lo caro que puede resultar utilizar las vías legales. Una demanda puede durar décadas y una vez que comienza debe llevarse a cabo hasta el final o se corre el riesgo de perder y tener que pagar al contrincante los costos en que



Protestas por la aprobación de Hidroaysen, Coihayque, 9 de mayo de 2011. Fuente: Pilar Valenzuela.

haya incurrido. Demandar temas técnicos es una vía casi imposible, aunque se tenga un caso bien argumentado. Se pueden presentar los argumentos, la empresa presentará los suyos, y probablemente el juez deba solicitar un perito, es decir, un tercero experto en el tema técnico, el cual puede ser un profesor universitario específico. El costo del perito generalmente lo pagan ambos, demandante y demandado, y puede ser carísimo y no resolver las diferencias. Así las cosas, la alternativa legal que más se utiliza es el recurso de protección, el cual es una acción cautelar que se solicita argumentando que un derecho constitucional ha sido vulnerado. Con ello, si es acogido, se detiene el proyecto demandado hasta que se resuelva la cuestión. Su uso tiene la ventaja de ser expedito, se resuelve rápidamente, es una urgen-

cia. El problema es que es sumamente restrictivo, es solo para impactos que vulneran derechos constitucionales esenciales.

Así las cosas, antes de tomar la decisión de entrar a una disputa ambiental, debemos evaluar nuestras posibilidades de financiamiento, cuál será la mejor estrategia comunicacional, quiénes son potenciales socios, buscar apoyo legal en ONG dedicada a ello (es muy probable que en alguna etapa lo vayan a necesitar) y evaluar el tiempo que va a durar, entre muchas otras cosas. Es que no será fácil y probablemente será una disputa larga, pero se gane o se pierda, como sociedad saldremos fortalecidos. Sin duda, el activismo ambiental nos permite mejorar en la protección de nuestra naturaleza y comunidades, y profundizar la democracia.

NOTA SOBRE LA AUTORA

Pilar Valenzuela, Ingeniera Ambiental de profesión, actualmente coordina la campaña www.QueremosTupungato.cl que busca proteger las últimas tierras públicas de la zona central de Chile. De siempre activista ambiental, anteriormente colaboró con la campaña Patagonia Sin Represas que logró detener la construcción de 5 mega represas en Aysén, en la Patagonia Chilena. Curiosa, tiene una variada experiencia en temas de agua, biodiversidad y evaluación de impacto ambiental.

HACER CIUDAD DESDE LO ADVERSO

ANA SUGRANYES

En este mundo complejo y amenazante, resulta difícil hablar de conquistas. Entre los hitos de la humanidad que inciden radicalmente en la forma de vida colectiva, quiero destacar aquí prácticas locales, no violentas, marcadas de organización social, a través de las cuales comunidades vulnerables construyen un lugar seguro donde vivir en paz y con dignidad.

Pensando en los múltiples desafíos del mejoramiento de barrio, de regeneración urbana, o el avance paulatino hacia el buen vivir de todas y todos en la ciudad, presento dos iniciativas comunitarias y ciudadanas en ciudades intermedias de Chile, donde colectivos organizados, con acompañamiento técnico, consiguen pensar el cómo hacer ciudad desde condiciones muy adversas.

De la amenaza de desalojo al plan maestro de Los Arenales, en Antofagasta

La historia del Macrocampamento Los Arenales –11 hectáreas de terrenos fiscales en medio de un área pobre, de vivienda social de mala calidad, el sector Lo Bonilla, en el norte de la ciudad de Antofagasta, capital minera– remonta a unos 10 años, cuando empezó a escasear la oferta del arriendo y subieron los precios; poco a poco, familias chilenas y migrantes se fueron a vivir a la toma para poder seguir pagando la comida y medicamentos.

Vivir en el asentamiento precario ha sido posible porque la necesidad, el esfuerzo y las exigencias abrieron puertas para descubrir a las vecinas e iniciar un proceso de organización local. Como dicen en Los Arenales, ‘cuando el Estado desaparece, la autogestión florece’; por supuesto, una figura simplista, pero que ilustra el empeño de sentar las bases de una gobernanza de barrio, una estructura organizativa que permita paliar las deficiencias en la convivencia de unas seis mil personas, en unas 1.200 viviendas precarias, la mayoría construidas con paneles de madera prensada, unas pocas de material duro.

A partir de 2017, entre las dos mil familias del asentamiento, surge de Los Arenales la capacidad de unas 40 mujeres de Los Arenales, que se comprometen en una dinámica sostenida, revisada, asesorada y negociada de autogestión para radiar el macrocampamento haciendo ciudad.

En contra de la inercia y dependencia que caracterizan por lo general las condiciones de vida en

los barrios, y a pesar de la agresividad del entorno, la amenaza de desalojo, el rechazo de la municipalidad, las duras condiciones locales y, sobre todo, los insultos –de todo han tenido que oír estas mujeres, de las autoridades o de la prensa–, el uso del espacio escaso y de los servicios precarios se ha ido ordenando y los servicios funcionando.

La sociedad chilena, en su gran mayoría, aduce que las familias en los campamentos ‘se saltan la fila’, que no pagan arriendo y logran apoyo del Estado. Una opinión bien alejada de la suma de esfuerzos colectivos, muchas horas, días y noches, de reuniones, capacitaciones y energías constantes para reforzar el bien común –estos valores de convivencia apenas conocidos en la era neoliberal y desconocidas por la opinión pública y las políticas sociales–.

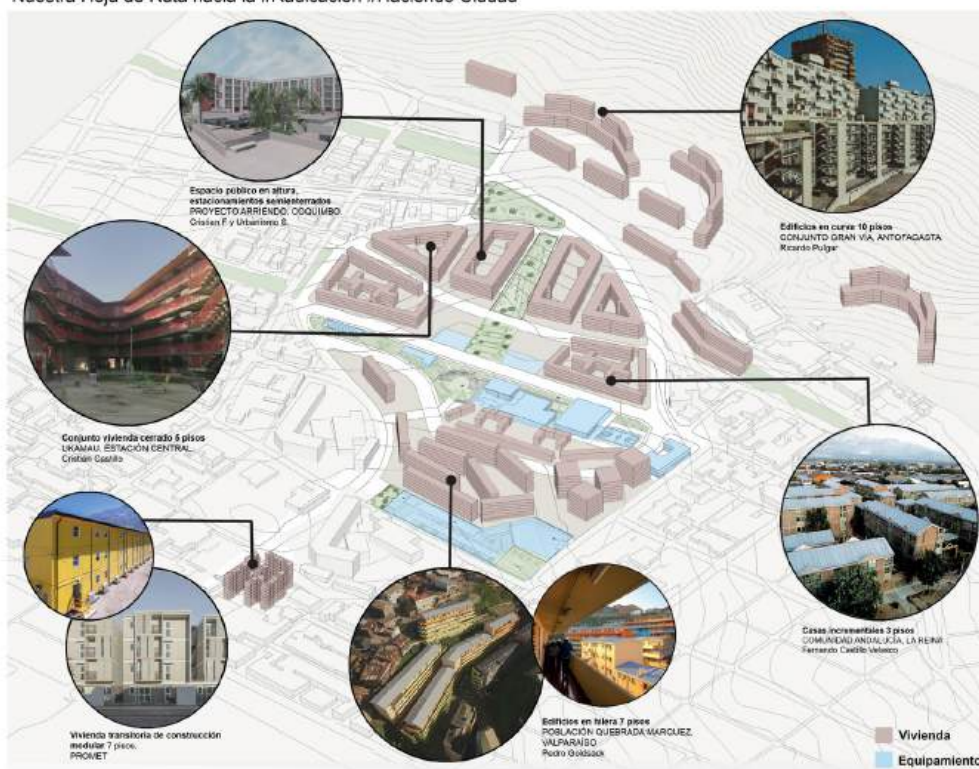
También hay apoyos. Este proceso local ha sido acompañado por profesionales independientes, comprometidos con la comunidad para revertir la



El Macrocampamento Los Arenales, Sector Lo Bonilla, Antofagasta.
Fuente: Google Earth 2025.

Conociendo esta lámina, las dirigentas comentaron: ¡Ahora sí, le vemos cara de barrio a esta imagen!
Fuente: Tamara Espósito, estudiante magister arquitectura, 2025.

Para las compañeras del Macrocampamento Los Arenales, para empezar a soñar el barrio y la ciudad.
Nuestra Hoja de Ruta hacia la #Radicación #Haciendo Ciudad



De Tamara Espósito y Ana Sugranyes, en agosto de 2025



Mujeres, artistas y arquitectas, presentando la arpillera de [propuestas ciudadanas para \[re\]generar la ciudad de Cartagena-San Antonio](#), en la Bienal de Arquitectura “doble exposición” 2025, el 27 de septiembre de 2025. Foto, A. Sugranyes.

situación de exclusión y hacer de Los Arenales un área de intervención piloto del gobierno actual de Chile –para no decir la única– hacia la definición de un barrio para vivir en dignidad.

En una rotación de personas y una permanencia de espíritu de apoyo, formamos un círculo multidisciplinario de profesionales, de la academia y de la buena voluntad; cada uno con otros contactos para más asesorías en temas de leyes, proyectos o trámites; es una cadena solidaria de respaldo, una circunstancia de confianza, para reforzar el empeño de la comunidad.

“Queremos profesionales que imaginen lo que nosotras soñamos”, dice Elizabeth Andrade, la vocera del macrocampamento; exige entonces textos y gráficas que sistematicen ideas y formalicen propuestas. La clave está en la paciencia y el tiempo, siempre tan escaso, para escuchar, entender, matizar, cuestionar, analizar y traducir de la creatividad popular a documentos que la institucionalidad pueda considerar entre los límites de sus políticas públicas.

Hay avances: el Ministerio de Vivienda y Urbanismo contrató el plan maestro y los proyectos específicos para la integración urbana de Los Arenales en el barrio de Lo Bonilla. El proceso de formalización es complejo y con muchos contratiempos y obstáculos enormes. Es a la vez una pesadilla y una oportunidad. La consultora a cargo de los estudios aceptó el desafío por estar convencida de que los asentamientos precarios se resuelven haciendo ciudad.

Lo novedoso de Los Arenales es que la comunidad, a través de 60 dirigentes, sigue definiendo las metas de este proceso de [radicación haciendo ciudad](#) y, para esto, cuenta con el apoyo del equipo técnico independiente, entre otros, para:

- obtener la certificación de que estos terrenos estén formalmente asignados a la radicación de la comunidad de Los Arenales y que el plan maestro no quede engavetado en un próximo gobierno;
- formalizar el uso de terrenos adyacentes para la construcción de viviendas transitorias en sistema modular de alta densidad para dar cobijo a turnos consecutivos de familias mientras se realicen las obras de urbanización por etapas;
- insistir en diferentes opciones de acceso a la vivienda, a pesar del modelo centrado en un solo producto; y
- defender la propuesta del subcentro urbano, cívico, cultural y de cuidados para las/los 50 mil habitantes del sector Lo Bonilla.

Continuará ...

Propuestas ciudadanas para regenerar la ciudad-puerto de Cartagena-San Antonio

La conurbación de dos municipios del litoral central de Chile, Cartagena-San Antonio, muestra una ciudad de unos 150 mil habitantes. Es una zona de sacrificio, deprimida y deprimente –a veces la llaman ‘Sad Antonio’, otras ‘el NO habitar’– entre condiciones adversas.

Hace cien años, Cartagena era el balneario de Santiago –la capital de Chile, a 100 kilómetros– combinando poesía, barrios de veraneo, tren de pasajeros y playas populares; todo quedó viejo. San Antonio, desde los años 50 del siglo pasado, se ha convertido poco a poco en el puerto de mayor tonelaje del país; tiene buena conectividad con Santiago y depende de Valparaíso, que resulta lejana. La política de infraestructuras del país planificó una extensión del puerto, para convertirlo en el más grande de la costa pacífica de América Latina (antes de que se construyera Chancay en el Perú); el megaproyecto conlleva impactos ambientales que harán insostenibles los ecosistemas de este borde costero; y seguirá destrozando la ciudad entregada a los camiones (a la inversa de Chancay, ni siquiera se pensó en un túnel de carga).

En esta ciudad de Cartagena y San Antonio, el ritmo de construcción de vivienda es lento y no corresponde al crecimiento de la importancia portuaria. Desde 2019, unas 4 mil familias han ocupado 250 hectáreas de terrenos *en engorde*, o de aprovechamiento urbanístico pendiente; han desarrollado un macrocampamento de baja densidad (nada que ver con la maraña enredada de Los Arenales), con calles trazadas y lotes de 300 a 400 metros cuadrados, consolidado a la vista y paciencia de los propietarios de esta tierra. Estos están interesados en una intervención del Estado –el valor de las expropiaciones en Chile se define a precio de mercado– y las familias instaladas tienen el mismo interés. Para presionar el ritmo de la transacción, los propietarios recurrieron a la justicia aludiendo usurpación; los tribunales les dieron la razón. [Hay una orden de desalojo, con cobertura televisiva muy apreciada](#); desde el Estado, hay varios intentos de negociación con los propietarios y con las comunidades.

Ante tanta adversidad, en el espíritu de la lenta construcción del derecho a la ciudad, teniendo a mano la oportunidad de la Bienal de Arquitectura 2025, un grupo de profesionales del Comité Hábitat del Colegio de Arquitectes decidimos acompañar un proceso de encuentro entre organizaciones ambientales, culturales, patrimoniales de Cartage-

na y San Antonio para que estas pudieran expresarse con gráficas y voz en la Bienal.

El proceso de los encuentros ciudadanos locales resultó complejo y desafiante; combinando reuniones virtuales con sesiones en el territorio, un grupo de mujeres se dejó tentar por la oportunidad. En seis meses de trabajo colectivo, entre dudas e ideas, se alcanzó lo comprometido: según la tradición Altazor del poeta Huidobro, fueron 7 láminas de gran formato y creatividad gráfica, para expresar “el no habitar, como una herida socio territorial, deviene resistencia, el arte y la fuerza colectiva unirán nuestros fragmentos para crear ciudad”, con denuncias y 77 propuestas.

La clave de esta experiencia estuvo en el atrevimiento de facilitar un espacio de creatividad colectiva entre organizaciones fragmentadas en un territorio herido y de llevar propuestas de hacer ciudad desde lo adverso a una bienal de arquitectura. Lo maravilloso del caso es que la iniciativa tuvo broche de oro con la producción de una gran arpillera –obra artesanal hecha con retazos de tela cosidos y bordados, utilizada especialmente por mujeres como forma de expresión artística, denuncia política y memoria histórica–.

Todo queda por hacer ante el Estado, la empresa portuaria, la ciudad inexistente y el rechazo al desalojo.

Continuará ...

A modo de conclusión, la ciudad se construye en permanencia, no es estática; se puede entender entre múltiples ‘asuntos personales y problemas públicos’, como sugería Wright Mills. Los dos casos aquí esbozados, ‘en pleno desarrollo’ como dicen los periodistas, logran pasar de la angustia personal a una propuesta colectiva. Describen un momento de convergencia entre necesidad y oportunidad. Muestran aprendizajes y formas solidarias de asistencia técnica, señales de consolidación de la organización local, a pesar del contexto incierto, entre amenazas y promesas. Podrían representar, o no, una hoja de ruta hacia el cumplimiento de los derechos humanos desde la especificidad de territorios vulnerables.

NOTA SOBRE LA AUTORA

Ana Sugranyes, catalana, chilena y ciudadana del mundo. Arquitecta y doctora en políticas habitacionales, con larga trayectoria de cooperación internacional. Autora de numerosas publicaciones sobre hechos urbanos y la vivienda protagonizada por sus habitantes; apoyando la articulación entre actores sociales, profesionales y académicos, en defensa de los derechos del hábitat.

A COMARCA DA LIMIA: UNHA PAISAXE AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN E RESISTENCIA

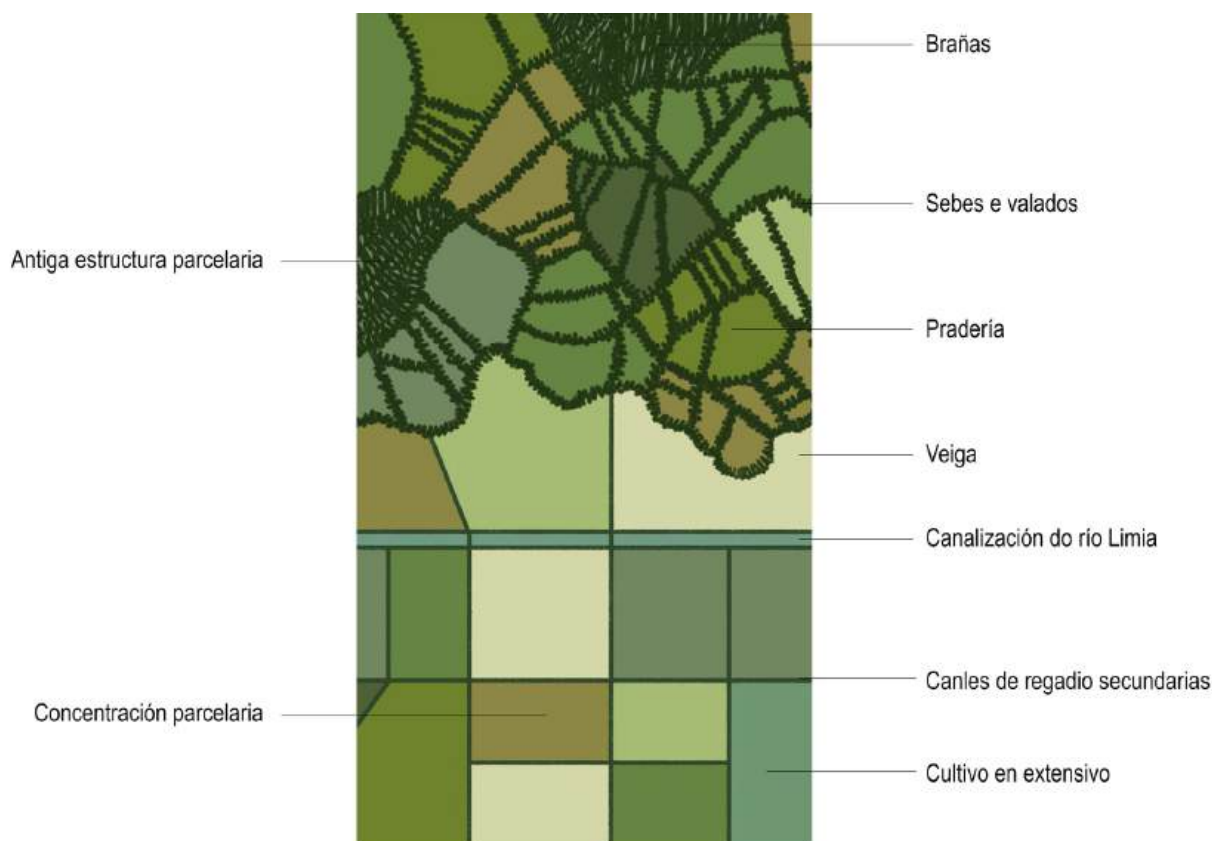
CLAUDIA DE SAS TRUJILLO E LUCÍA ESCRIGAS RODRÍGUEZ

No interior da provincia de Ourense esténdese unha ampla chaira atravesada polo Limia, río que lle dá nome á comarca. Este espazo acolleu no pasado un dos maiores humidais de augas doces da Península Ibérica: a lagoa de Antela, que chegou a ocupar máis de corenta quilómetros cadrados, o equivalente á superficie do concello da Coruña.

Xunto á lagoa principal existían veigas, brañas e ribeiras que conformaban unha paisaxe húmida de alto valor ecolóxico. A poboación local aproveitaba estes recursos de maneira tradicional, combinando o uso dos pastos, a sega e os pequenos cultivos nun equilibrio adaptado ás condicións naturais do medio.

Entre 1958 e 1968 desenvolvéronse as obras de drenaxe e canalización que permitiron a desecación da lagoa de Antela, nun proceso promovido baixo o discurso da “modernización agraria” do réximen franquista. O proxecto perseguía a

creación de grandes extensións de cultivo continuo, alterando de maneira profunda a estrutura tradicional do territorio e as súas dinámicas socioecolóxicas. Considerado un dos primeiros procesos de concentración parcelaria en Galicia, deu lugar a unha extensa chaira agrícola dotada dunha nova rede hídrica e viaria, que transformou radicalmente a paisaxe e os usos do solo. A posterior venda das terras a prezos simbólicos (Fernández Soto et al., 2011) favoreceu a implantación de actividades industriais e consolidou un modelo produtivo baseado na intensificación agraria, cuxos efectos sobre a sustentabilidade



Paisaxe de transición na Limia. Fonte: as autoras.

ambiental seguen sendo obxecto de análise e debate.

A pesar desta transformación, a paisaxe de chairas abertas e zonas húmidas conserva hoxe un papel esencial na conservación das aves migratorias do interior de Galicia. Grazas á actividade agraria baseada no cultivo de cereais, mantéñense especies propias das zonas esteparias. Esta realidade motivou a inclusión do territorio na Rede Natura 2000, coa creación en 2009 da Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA) A Limia, pola presenza de especies ameazadas como *Tetrax tetrax*, *Otis tarda* e *Circus pygargus*, xunto co vexetal endémico *Eryngium viviparum*. Destaca tamén a Veiga de Ponteliñares, un dos últimos restos de hábitats húmidos da comarca, declarada Zona Especial de Conservación (ZEC) pola súa singularidade e pola presenza de especies asociadas a estes ecosistemas fluviais.

Un caso de intensificación e conflito ambiental

Na actualidade, A Limia enfróntase a unha intensa presión ambiental derivada da expansión da gandería intensiva, especialmente pola proliferación de macrogranxas porcinas e avícolas.

Esta industria produce grandes volumes de puríns que, ao seren aplicados ou almacenados de forma inadecuada, infiltranse no solo e chegan ás augas superficiais, provocando a contaminación das masas de auga e as alteracións nos ecosistemas asociados. A alta presenza de nitratos nas augas ten a súa orixe nestes residuos gandeiros, xerando preocupacións crecentes sobre a calidade da auga, a saúde ambiental e o cumprimento das directivas europeas en materia de protección dos recursos hídricos.

O caso máis representativo de contaminación por esta actividade gandeira é o do encoro das Conchas, situado no concello de Lobios, a aproximadamente oito quilómetros augas abaixo do río Limia. En 2019 chegaron a rexistrarse ata 97 millóns de bacterias por litro, convertendo este encoro nun dos máis contaminados de España. A sobrecarga gandeira –equivalente, en residuos, á produción dunha poboación de máis dun millón e medio de persoas concentrada nun 1% do territorio galego– evidencia que a orixe do problema non se atopa nos vertidos urbanos, senón na xestión dos residuos procedentes das macrogranxas (TSXG, 2025).



Veiga de Ponteliñares. Foto: as autoras.

Puríns acumulados sobre a terra de cultivo. Foto: as autoras.





A Limia dende a Torre de Sandiás. Foto: as autoras.

As floracións tóxicas e os malos cheiros foron denunciados pola veciñanza, que advertiu restricións no uso da auga e riscos para o abastecemento local (*La Voz de Galicia*, 2025). Fronte a este contexto, distintos colectivos locais e ecoloxistas –entre eles o Movemento Ecoloxista da Limia, Auga Limpa Xa, Adega, Amigas da Terra e a Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN)– promoven alternativas baseadas na restauración ambiental e na agricultura sustentable.

Un exemplo destacado é o proxecto da Veiga de Gomareite, en Vilar de Barrio, desenvolvido pola Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN) en colaboración co gandeiro Samuel Formoso desde 2014. Neste enclave, restaurouse unha zona húmida situada no antigo dominio da lagoa de Antela mediante a aplicación de pastoreo extensivo, recuperando así unha práctica tradicional das veigas que contribúe de maneira natural ao mantemento dos pastos e da cobertura herbácea.

A preocupación pola degradación da comarca transcende o ámbito local: o Plan Estratéxico

de Humedais 2030, impulsado polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, contempla a restauración de 500 hectáreas da antiga Lagoa de Antela, o que evidencia o recoñecemento do valor ambiental deste espazo a nivel estatal. Porén, tal e como sinalan diversas asociacións ecoloxistas, o proceso de recuperación avanza con lentitude debido á falta de coordinación entre administracións e á escaseza de recursos destinados á súa execución.

Cara a unha xestión sostible do territorio

A mellora da xestión territorial na chaira da Limia pasa por restaurar a paisaxe hídrica das veigas, brañas e ribeiras, recuperando ao tempo a memoria colectiva e o coñecemento local que durante séculos sostiveron o equilibrio entre produción e natureza. A iniciativa da SGHN, en colaboración co gandeiro Samuel Formoso, demostra que é posible compatibilizar a produción agraria coa recuperación ecolóxica cando existen vontade, cooperación e apoio técnico.

A transformación da Limia require crear accións concretas baseadas nas prácticas tradicionais, como a gandeiría extensiva, e no recoñecemen-

to das iniciativas que camiñan cara esta idea. Falamos de vida e saúde das persoas que habitan este territorio, pero tamén do traballo de colectivos ambientais que, con poucos medios, dedican grandes esforzos á restauración dos humidais e ao recoñecemento do seu valor ecolóxico.

A comarca da Limia necesita abandonar o actual modelo industrial e avanzar cara a outros sistemas produtivos capaces de diversificar a economía local, xerar riqueza e fixar poboación sen comprometer os recursos naturais. A produción agroecolóxica, o turismo ornitolóxico e agrario ou a recuperación de produtos de proximidade son algúns exemplos que se deben explorar.

Admitir a problemática por parte da poboación e das administracións sitúa hoxe a Limia como un territorio de resistencia e esperanza, onde a acción colectiva, o compromiso cidadán e o respecto polos límites naturais poden abrir un futuro máis xusto, saudable e sostible para o conxunto da sociedade.

Bibliografía

- El País (2025). *Antela, la gran laguna 'excomulgada' y aniquilada, recupera vida con ayuda de las vacas de Samuel*. <https://elpais.com/espana/galicia/2025-09-14/antela-la-gran-laguna-excomulgada-y-aniquilada-recobra-vida-con-ayuda-de-las-vacas-de-samuel.html>
- TSXG (2025). *Sentencia 14/2025 sobre a contaminación das augas da Limia*. Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
- Fernández Soto, M., Fernández García, A., Fernández Cuesta, G., & Fernández Prieto, J. R. (2011). La desecación de la laguna de Antela. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*, (57). <https://bage.age-geografia.es/ojs/index.php/bage/article/view/1385>
- La Voz de Galicia (2025). *Renace la plataforma Auga Limpa Xa para respaldar a los vecinos de As Conchas en su lucha contra la contaminación del embalse*. <https://www.lavozdegalicia.es/noticia/ourense/lobeira/2025/05/11/renace-plataforma-auga-limpa-xa-respalda-vecinos-as-conchas-lucha-contr-contaminacion-embalse/00031746977678259296599.htm>

NOTA SOBRE AS AUTORAS

Lucía Escrigas. Arquitecta pola Universidade da Coruña e especializada en planificación e xestión territorial. Participa en proxectos mediante metodoloxías de análise multiescala, integración de axentes e deseño de estratexias de intervención. Desde 2021 forma parte do equipo da Fundación RIA.

Claudia de Sas. Paisaxista especializada en planificación territorial e desenvolvemento rural, con enfoque na preservación do patrimonio natural e cultural. Desenvolve o seu traballo en Galicia, colaborando en proxectos de paisaxe, ordenación e desenvolvemento rural baseados na xestión responsable do territorio e na optimización dos recursos naturais. Actualmente exerce como paisaxista na Fundación RIA.

EL PLANTER: DISCURS I ACCIÓ DES DEL POBLE

TEXTO Y FOTOS: EL PLANTER

Idees com l'èxit, la victòria o la conquesta remeten a tres qüestions bàsiques: qui guanya, qui perd i què es disputa. L'editorial El Planter, quin paper ocuparia en eixe esquema? Som guanyadores o perdedores? Conqueridores o conquerides? Per a poder respondre a això, primer, hem d'explicar algunes coses.



El Planter és un projecte editorial arrelat a Borriol, un municipi de la comarca castellonenca de la Plana Alta. En realitat, som l'intent de continuació de l'Assemblea l'Era, un col·lectiu autogestionat que, entre 2019 i 2021, va permetre organitzar a multitud de joves convençudes de la necessitat de donar resposta a l'auge reaccionari al nostre poble. Exhaustes les forces després d'un període d'intensa activitat, algunes integrants de l'assemblea vam decidir no detenir-nos en la construcció de discurs i en la reivindicació d'espais. Necessitàvem llocs segurs on continuar pensant i debatent al voltant de les problemàtiques que ens travessen com a individus i com a societat. Llocs, també, on trobar-nos, on experimentar amb altres possibilitats de creació artística, altres formes de relacio-

nar-nos i de gaudir juntes. Partint d'aquestes necessitats, l'any 2022 va néixer l'editorial El Planter, un col·lectiu compromés amb la paraula com a eina per a l'agitació social, cultural i política.

Des del principi, el nostre projecte vertebrador ha estat la publicació d'una revista, que aquesta tardor ha arribat a la seua quarta edició. Una revista pensada com un espai simbòlic, una casa feta de paper i paraules. Un lloc sense portes, ben ample, on acollir a totes aquelles persones i col·lectius que, des de Borriol o des d'altres punts del territori treballen quotidianament per la transformació social. Així vam anar donant forma a les primeres edicions, que funcionen com a miscel·lànies on veus del nostre entorn aborden qüestions d'ecologia, feminisme, antirracisme, educació, art... En un primer moment, ens interessava, sobretot,



fer explícit l'arrelament de les autores i les idees amb el nostre territori, amb els nostres pobles. En eixe sentit, continuem pensant la nostra editorial com una ferramenta a través de la qual reivindicar i defensar el nostre desig d'expressar-nos i actuar políticament des del nostre territori, sense haver de marxar. Sense haver de fugir.

Estem soles en aquesta feina? Evidentment, no. Primer, perquè en el camí hem conegut moltíssimes persones amb les quals compartim inquietuds i aspiracions, en les quals hem trobat fonts valuoses d'inspiració i d'aprenentatges. Segon, perquè en el nostre propi context hem comprovat de quina manera les problemàtiques que abordem interpel·len a molta gent. És en aquest sentit que podríem entendre i reivindicar el nostre com un *territori viu*, més enllà de les mirades

que tendeixen a idealitzar la *ruralitat* com a oasi de vides més autèntiques i sense conflicte. És evident que els pobles, com les ciutats, són escenaris de les violències quotidianes del capitalisme, però també poden convertir-se en els llocs des dels quals pensar i teixir resistències i alternatives.

Una demostració encoratjadora d'açò es va produir en l'acte de presentació de l'editorial, que va servir també per a començar la distribució del primer número de la revista. Durant una vesprada d'agost, desenes de persones ens vam reunir en una cèntrica plaça de Borriol, responnent a una crida molt simple: proposàvem ajuntar-nos per a reflexionar al voltant de com habitem l'espai públic (també per a recitar poesia, gaudir de música en directe, sopar a la fresca...). Nosaltres, per descomptat, també volíem intervenir en la discussió,



per a la qual cosa vam fer de l'acte mateix el nostre principal argument: es tractava d'una reunió veïnal organitzada autònomament, un espai radicalment obert on discutir horitzontalment sobre una problemàtica comuna; un acte, a més, de reapropiació col·lectiva d'una plaça convertida d'uns anys ençà en un pàrquing.

Creades les condicions apropiades, aquella vesprada es va fer palesa l'evidència que molta gent al nostre poble compartia preocupacions semblants en relació amb la transformació dels carrers en espais cada cop menys habitables. Des d'intervencions de gent gran que demanava més bancs on seure a descansar fins altres que criticaven les carències de l'entramat urbà, totes incidien en l'evidència: necessitem una gestió dels espais públics centrada en les necessitats concretes del veïnat, no en les exigències del mercat immobiliari ni en l'absurda obsessió per turistificar-ho tot. Eixe dia, a més, també vam veure confirmada una altra de les idees que defensem des d'El Planter: els processos de reflexió només tenen sentit quan es realitzen col·lectivament. És en eixos moments de trobada de sensibilitats diverses, en eixos espais d'encontre entre iguals, on la crítica i la creativitat polítiques poden aflorar amb tot el seu potencial.

La qüestió de l'espai públic ens ha acompanyat, per tant, des del principi. Combinant la reflexió teòrica amb pràctiques d'ocupació i intervenció dels espais des de l'autogestió, hem anat trenant el nostre propi discurs, el nostre propi diagnòstic, les nostres pròpies alternatives. Situades, com sempre, en el nostre entorn, però amb la voluntat d'articular pensaments i pràctiques capaces de transgredir el context concret i projectar-se cap a transformacions més globals i profundes. Aquesta és la intenció que justifica el replantejament de la revista: amb el darrer número, publicat a la tardor, hem abandonat el format de miscel·lània per a reflexionar més profundament i des de diferents

prismes sobre l'espai públic. Per a fer-ho, d'acord amb les certeses ja expressades, hem comptat amb la col·laboració de diverses persones i col·lectius. Cadascuna d'elles aborda qüestions vinculades amb els espais públics amb perspectives i ferramentes diferents: des de la reflexió teòrica fins a la creació literària, passant per la il·lustració, la fotografia o la intervenció artística als carrers. Totes elles ens han permès construir una revista que vol ser, com deïem, una eina no només per convidar a la reflexió, sinó també per a incitar a l'acció.

El Planter desenvolupem la nostra activitat amb l'objectiu de tensionar l'estat actual de les coses. Sabem que una revista editada des d'un poble com el nostre difícilment podrà convertir-se en el detonant d'un canvi sistèmic profund. Quan s'aspira a la subversió radical de la realitat, és complicat parlar de victòries. És una victòria editar una revista? És una conquesta aconseguir situar certs debats en la discussió pública? Som un projecte exitós després de quatre anys d'activitat? Nosaltres no ens sentim còmodes amb aquests plantejaments i, per tant, procurem pensar el projecte des d'altres perspectives. Amb la nostra feina quotidiana, ens imaginem avançant cap a la construcció d'una realitat més justa, amb el nostre poble i tots els pobles del món vivint plenament i en dignitat. Per a fer-ho, aterrem a qüestions concretes, actuem amb la intenció d'incidir de manera efectiva en el nostre context més immediat. Cultivem, per exemple, l'esperança i el convenciment en què altres maneres de gestionar i habitar els carrers és possible i desitjable. Perquè estem convençudes que, de vegades, entre tanta desmobilització i tanta sensació d'impotència, alguna paraula arriba, algun gest transcendeix i genera altres gestos i algú es mira el poble i es mira el món de maneres noves i aleshores allò que veu no el satisfà i desitja canviar-ho i es pregunta com fer-ho i troba amb qui fer-ho. I sabem que només així, juntes, ens en podrem sortir.

NOTA SOBRE L'AUTORIA

El Planter és una editorial de Borriol (La Plana Alta, Castelló) compromesa amb l'agitació política i cultural emprant la paraula com a ferramenta. La seua tasca principal se centra en la publicació d'una revista anual, així com l'edició de fanzines, l'organització d'activitats culturals, intervencions artístiques al carrer, etc. A través de la seua pàgina web (<https://editorialelplanter.wordpress.com>), difon en accés obert tots els materials que genera.



EL CONJUNTO DE VIVIENDAS QUE TIENE ESPERANZA EN EL NOMBRE

TARCYLA FIDALGO

El Conjunto Esperança es un conjunto habitacional de 70 viviendas construidas por los propios residentes mediante un esfuerzo comunitario, utilizando una línea de financiación pública vinculada al programa brasileño de vivienda “Mi Casa, Mi Vida”.

Tras la lucha de los movimientos sociales, el programa mencionado comenzó a destinar un pequeño porcentaje de los fondos públicos para la producción de viviendas a proyectos autogestionados, como el que se muestra aquí. Este pequeño porcentaje de fondos pasó a formar parte del programa “Mi Casa, Mi Vida-Entidades”. Cabe destacar que Brasil se basa en una política de producción de vivienda social impulsada por el mercado, mediante subsidios garantizados por el gobierno a las empresas constructoras. Esta lógica, que somete la producción de viviendas a la lógica capitalista del lucro y la mercantilización de la vivienda, tiene consecuencias perjudiciales como la mala calidad de la construcción y la inadecuación geográfica y cultural de las viviendas destinadas a la población de bajos ingresos del país.

El programa “Mi Casa, Mi Vida-Entidades” representa precisamente un intento de cambiar este paradigma a través de la lucha social. Aquí, grupos organizados por movimientos sociales, tras reci-

bir formación técnica y política, diseñan y construyen sus propias viviendas bajo la lógica de la vivienda como derecho y la autogestión como alternativa para empoderar a los residentes y permitirles apropiarse de sus territorios.

Conjunto Esperança es un ejemplo del éxito de este compromiso con la lucha social. Las casas se terminaron en 2014, tras cuatro años de construcción durante los cuales los futuros residentes construyeron sus casas sin saber cuál sería la suya. Este tipo de construcción, combinado con la formación política, creó lazos de solidaridad y pertenencia que han sido fundamentales para la cohesión del grupo durante los últimos 11 años, a pesar del descenso de la movilización en los últimos años tras la entrega de llaves.

De hecho, la entrega de llaves y la consiguiente individualización de las viviendas provocaron un mayor aislamiento de los residentes en sus contextos personales, además de propiciar el surgimiento de conflictos vecinales. Muchos residentes, al adquirir sus viviendas, comenzaron

a sentirse seguros en su situación y, en consecuencia, a cuestionar acuerdos preestablecidos, como el mantenimiento de las fachadas, el uso de los espacios comunes y la permeabilidad del suelo.

Sin embargo, los conflictos no lograron desmovilizar por completo a la comunidad que se había formado allí, ya que los residentes actuaron colectivamente en varias ocasiones para defender su territorio y promover mejoras urbanas y habitacionales. Ejemplos de acción colectiva incluyeron la adquisición de un huerto urbano para garantizar la alimentación de los residentes, la colaboración con el modelo de fideicomiso de tierras para una formalización que restaurara los convenios colectivos, y las obras en torno a la construcción de un centro comunitario, un espacio dedicado a actividades colectivas para la generación de ingresos, la promoción de la salud, la memoria y la movilización vecinal. La última y más importante batalla fue contra la *milicia*, un grupo armado que logró controlar el territorio que rodea las casas y comenzó a amenazar directamente a los residentes de *Conjunto Esperança*. Se denomina *milicia* a los grupos que ejercen control territorial mediante la extorsión a los residentes, cobrando por servicios

públicos y privados y el uso de áreas comunes. En los últimos años, la *milicia* se ha convertido en una de las principales fuerzas de poder paralelo en la ciudad de Río de Janeiro, controlando casi la mitad de su territorio.

En este escenario, los residentes necesitaban reforzar sus estrategias de movilización y conseguir apoyo externo para resistir el avance de la *milicia* en su territorio. Así, además de las reuniones colectivas periódicas, los residentes recurrieron sistemáticamente a la presencia de apoyo externo en el territorio como forma de demostrar que el espacio estaba bajo vigilancia de organizaciones y agentes externos, protegiéndose así de la influencia de la *milicia*. Otra estrategia ampliamente utilizada fue sensibilizar a los residentes sobre las amenazas y los riesgos del territorio, evitando que cualquier comportamiento permisivo de una minoría comprometiera la integridad territorial de todo el grupo.

La experiencia brevemente descrita aquí ofrece una serie de lecciones aprendidas y estrategias fundamentales para el éxito de la iniciativa, más allá de la construcción de viviendas. De hecho, en el caso presentado, el éxito se relaciona con el mantenimiento de los acuerdos sociopolíticos

Comunidad Esperança. Celebrando la pintura del muro hecha por los propios moradores con apoyo de un profesional.

Foto: Catalytic Communities.





Después de una reunión con los residentes para decidir los términos del Estatuto Social de la entidad que va a gerenciar el territorio. Foto: Catalytic Communities.

creados durante el proceso formativo del trabajo colectivo, que aportan una perspectiva desmercantilizada a la vivienda. Como se ha visto, el mantenimiento de estos acuerdos enfrenta numerosos desafíos continuos, desde la desmovilización de los residentes como resultado de la individualización de las viviendas hasta las ame-

nazas de grupos armados que buscan afirmar el control del territorio. Superar estos desafíos, aunque nunca definitivos, requiere la resiliencia del grupo para idear estrategias diferentes capaces de mantener la cohesión interna y utilizar a los apoyos externos como garantes de los pactos colectivos y de la salud del territorio.

NOTA SOBRE LA AUTORA

Tarcyla Fidalgo es abogada y urbanista, activista por la vivienda y asesora de movimientos sociales. Su principal área de investigación es la economía política del suelo y los bienes comunes urbanos, con énfasis en el modelo de los Community Land Trusts. [Más artículos de la autora en Crítica Urbana.](#)

A CONTRAVIENTO

NERY DÍAZ PRIETO

Como en muchas otras ocasiones en la historia de la humanidad, lo que inicialmente era una muy buena idea, producir energía renovable, acaba por convertirse en un desastre ambiental, económico y social por su inadecuada implantación. Cabe recordar el tan socorrido ejemplo del cuchillo, que sirve para cortar el pan, pero también para cometer un asesinato.

Mucha gente me pregunta, ¿cómo podéis estar los “ecologistas” en contra de las energías renovables? Hace años, cuando se instalaron los primeros parques eólicos, de tamaño reducido, los veía de camino entre Viveiro y Lugo y me parecían algo beneficioso. No me había parado a pensar que podían tener un impacto negativo, ni mucho menos que un día llegarían a ser una auténtica invasión. Pero muchos años después, escuchando a los científicos y a los propios afectados, me di cuenta de que en Galicia ya teníamos demasiados parques eólicos y que no se instalaban en los lugares donde podían tener menor impacto, sino en donde les interesaba a las empresas promotoras, por lo que seguir autorizando proyectos en esas condiciones causaría daños muy superiores a los beneficios.

En Cabana de Bergantiños estuve con expertos en el lugar donde se pretendía construir el parque eólico Os Mourinhos, en 2017, y ya fui consciente del daño paisajístico y a la biodiversidad que iba a implicar, dada su cercanía a varias zonas protegidas, incluidas zonas de especial protección para las aves, cuando la mortandad de éstas causada

por las aspas está suficientemente documentada. Presentamos alegaciones en la administración correspondiente, pero de poco sirven en la mayoría de las ocasiones, aunque se entreguen por miles.

Más tarde, cuando se presentó el proyecto del parque eólico O Iribio, que afectaría gravemente a la Sierra del mismo nombre, con un paisaje de ensueño desde el que se divisan poblaciones enteras de varias provincias, de altísimo valor ecológico –incluida en la Red Natura 2000 y con presencia de especies protegidas como el oso pardo y el águila real, además de patrimonio arqueológico– volví a tener la misma sensación, pero con mayor intensidad, porque era en mi provincia y me tocaba más de cerca. Cuanta más información tenía, más consciente era del daño irreparable y los perjuicios irreversibles que su implantación iba a suponer. En pocos meses, tras el inicio de la lucha organizada desde la plataforma “Salvemos o Iribio”, en 2019, y gracias a las medidas cautelares dictadas en el procedimiento contencioso-administrativo, la obra se paralizó.

A partir de ahí comprendí que, por muy razonadas que estén las alegaciones, por mucho daño que justifiques que se va a producir, los gobernantes

y sus técnicos, inexplicablemente, parecen volverse miopes y en la mayoría de los proyectos se empeñan en seguir adelante contra viento y marea. Aunque un proyecto sea muy descabellado, para las empresas promotoras y los gobernantes locales y autonómicos (que deberían velar por el interés general), todo vale cuando hay negocio de por medio y sólo un tribunal de justicia puede pararlo y, si hay motivos, lo para.

La mayoría de las plantas fotovoltaicas y parques eólicos en toda España recibieron apoyo económico público mediante subvenciones y créditos blandos, lo que impulsó una burbuja que llevó a un exceso de oferta que en la actualidad está haciendo inviables económicamente numerosos proyectos, ante lo cual nuestros gobernantes han decidido salir al rescate. Es una situación perversa en la que los ciudadanos financiamos la burbuja y el rescate cuando ésta estalla, además de sufrir la degradación ambiental, paisajística y de la biodiversidad.

Además sigue vigente, con escasas modificaciones, la Ley de Expropiación Forzosa aprobada en 1954, que permite declarar de utilidad pública

e interés social con enorme facilidad cualquier proyecto, aunque su interés sea eminentemente privado.

En marzo de 2020, en plena pandemia, varias mujeres que habíamos participado activamente en la lucha contra el parque eólico Iribio y en otros temas ambientales y sociales creamos el grupo de Lugo de una asociación ecologista de ámbito autonómico, que participaba a su vez en una confederación estatal y continuamos trabajando en diferentes asuntos relacionados con la protección del medio ambiente.

En 2022 ya emprendimos desde el colectivo acciones legales contra varios asuntos: minería, protección del río Miño, etc., todas ellas mediante justicia gratuita y en aplicación del Convenio de Aarhus¹.

Reorganización del colectivo

A finales de 2022 y por diferentes motivos, entre ellos el apoyo a la eólica marina por parte de la confederación estatal en la que estábamos integrados (que impacta de forma dramática en los ecosistemas marinos poniendo en peligro los

Participando en una protesta en Bruselas. Fuente: Nery Díaz Prieto.



menguantes recursos pesqueros y la soberanía alimentaria), la asociación decide seguir trabajando de forma independiente, pasando a denominarse Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde. Esta decisión implicó un doloroso conflicto con otros grupos pertenecientes a la misma Confederación y la necesidad de partir de cero, creando nuevas redes sociales, página web, etc.

Nuestra asociación se organizó, por un lado, en grupos comarcales; puede verse el mapa en nuestra página www.ecoloxistas.org. La integran, desde 2023, 22 grupos comarcales, cada uno con sus propios temas a trabajar, aunque en ocasiones nos encontramos con proyectos que abarcan comarcas, provincias y comunidades diferentes, e incluso alguno afecta también a Portugal.

Por otro lado, se organiza también en áreas temáticas, donde participan miembros de todos los grupos: Educación, Saúde, Minería, Patrimonio, Lumes, Stop Eucaliptos, Agroecoloxía.

Fue un momento muy duro del que salimos fortalecidos gracias a que contamos con miembros en las diferentes provincias con un gran nivel formativo, disposición para trabajar y una enorme calidad humana, conformándonos desde enton-

ces como una asociación más fuerte, más libre e independiente.

La asociación no dispone de cuenta bancaria, puesto que no recibe subvenciones ni cobra cuotas a los socios y acudimos a los tribunales mediante abogados de oficio, lo cual nos permite participar en muchos procedimientos utilizando los medios del sistema para luchar contra él. Este funcionamiento con cero recursos económicos garantiza nuestra independencia, transparencia y credibilidad ante potenciales nuevos socios.

El aprendizaje fue inmenso y también la oportunidad de coincidir con muchas personas generosas, honestas y que dedican su tiempo libre, de forma totalmente desinteresada, a evitar el expolio del territorio y a proteger el valioso patrimonio natural que hoy está en serio peligro.

En enero de 2023 presentamos recurso de alzada contra la autorización del parque eólico O Picato que afectaría considerablemente a la ciudad de Lugo, en la que resido.

A partir de ahí se autorizaron por el gobierno autonómico, como si no hubiese un mañana, muchísimos más parques eólicos en las 4 provincias, aprobando incluso 75 de golpe.

Lugar en el que se instaló el parque eólico de Mouríños, Costa da Morte, Galicia. La foto es del 28-08-2017, antes del comienzo de las obras. Fuente: Nery Díaz Prieto.



Eso implicó un trabajo descomunal para asociaciones como la nuestra, que, como se ha comentado, había acordado en la nueva andadura no aceptar ningún tipo de subvenciones, ni cobrar cuotas a los socios, dependiendo exclusivamente del trabajo voluntario. Con gran esfuerzo conseguimos acudir al procedimiento contencioso-administrativo contra la mayoría de los proyectos, aportando informes técnicos de expertos de distintos ámbitos que avalaban lo desacertado de la implantación, al no respetar la protección de diversas especies, las distancias a las viviendas, el patrimonio arqueológico, etc.

Las amenazas son muchas y crecientes. Aunque el número de socios ha aumentado, los asuntos por los que luchar también. Casi no hay día en el que no tengamos conocimiento de un nuevo proyecto: macroeólicos, granjas sin tierra (macrogranjas), talas de robledales, destrucción de patrimonio, vertidos, plantas de biogás y biometano, minas, celulosas, hidrógeno, ...

Nuestras luchas son largas, al contar con muchos frentes abiertos, que necesitan un enfoque multilateral: información y concienciación desde nuestra página web y redes sociales; estudio de los proyectos; redacción, difusión y presentación de alegaciones, denuncias, peticiones, sugerencias; organización de acciones, formaciones, campañas; colaboración con otras asociaciones y plataformas; interposición de los correspondientes recursos contencioso-administrativos cuando se agota la vía administrativa.

La lucha es muy desigual, puesto que parece que las instituciones públicas y los Goliath del capital (empresas y fondos de inversión) confluyen en un mismo objetivo: permitir el acaparamiento de tierras y de agua y expulsar a la poca gente que queda en el rural, sin importar el daño a la salud

de las personas, a la biodiversidad y al patrimonio cultural y arqueológico que supone para la sociedad actual y a las generaciones venideras.

Este expolio pasa demasiado desapercibido y más aún en los últimos años al maquillarse de



Paralizaciones cautelares de proyectos de parques eólicos decretadas por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia desde diciembre de 2023.
Fuente: Galicia Atlántica e Verde.

verde, con la pasividad, cuando no complicidad directa, de los medios de comunicación mayoritarios.

Nos dicen que estos proyectos suponen beneficios y oportunidades que no hay que rechazar, aunque eso implique cambiar las reglas del juego con la partida empezada, con tal de ayudar a ganar dinero a esas empresas a las que se les pone alfombra roja, aunque se sepa que contaminan aire, tierra y agua y nos cueste millones y millones de euros públicos mantenerlas, como ocurre en el caso de Alcoa. Sin embargo, como indica el científico Fernando Valladares, no hay prosperidad si para construir el presente destruimos el futuro.

En este momento el gobierno de la Xunta de Galicia, ante los varapalos de numerosos proyectos eólicos en los tribunales, impulsa reformas legislativas que permitirán que las líneas de alta tensión puedan atravesar espacios protegidos, así como que los parques eólicos gocen de prioridad sobre la normativa de protección del paisaje.

La visión cortoplacista de nuestros gobernantes significa pan para hoy (para una minoría) y hambre para mañana, avanzando un paso más hacia

el suicidio como especie, puesto que sólo somos una pieza más de la naturaleza y del puzzle de la vida y si dañamos a ésta nos dañamos a nosotros mismos. No se puede estar sano en un planeta degradado y enfermo.

Hoy la ciencia ha demostrado que hay muchas razones “egoístas” para el ecologismo, además de las tradicionales motivaciones altruistas. No estamos en condiciones de permitirnos perder lo valioso que aún nos queda: bosques autóctonos centenarios, especies en peligro de extinción, manantiales, turberas, ríos, el canto de los pájaros, paisajes increíbles, ... No podemos, no queremos y no debemos consentirlo y por eso muchas personas del colectivo nos dejamos la piel cada día, intentando evitar que tenga lugar un expolio más. Cada generación tiene la obligación de trasladar a la siguiente un mundo al menos no peor de como lo ha recibido.

Considero que la asociación Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde en estos tres años de funcionamiento independiente (2023-2025) ha aportado mucho a la sociedad y toca hacer un balance muy positivo de lo conseguido desde el colectivo: unas 70 paralizaciones cautelares de pro-

Burla Verde 2025. Vilanova dos Infantes, Ourense. Fuente: Nery Díaz Prieto.



yectos eólicos, sentencias favorables a nuestras peticiones en dos minas y multitud de solicitudes atendidas.

En esta corta pero intensa andadura, hemos perdido a una valiosa compañera de lucha y a dos abogados de oficio intachables.

Personalmente intenté darlo todo en cada momento, como aconsejo siempre a mis hijos, pero creo que ha llegado la hora de que personas más jóvenes se pongan al frente, y dar un paso atrás, porque la vida pasa y la salud no es la que era.

Ser activista reporta múltiples gratificaciones: compartir la lucha con personas maravillosas que de otro modo no conoceríamos, sentido de propósito; saber que con nuestra lucha hemos conseguido preservar, al menos por el momento, ecosistemas valiosos, con millones de seres vivos que podrán continuar sus vidas,..., pero también, como todo en la vida, dificultades, como en oca-

siones la impotencia ante la falta de resultados a pesar del enorme esfuerzo, la carencia de tiempo libre, la incompreensión de las familias que se sienten un poco abandonadas y se preocupan porque descuidas incluso tu autocuidado.

Soy consciente de que, a mi edad, con mi salud y nietos a los que ayudar a cuidar, pero hijos aún adolescentes, ya toca comenzar otra etapa con un perfil más bajo dentro del colectivo y con tiempo para poder dedicarlo a mi familia y a mí.

Nota

1. Instrumento de Ratificación del Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, hecho en Aarhus (Dinamarca), el 25 de junio de 1998. BOE, BOE-A-2005-2528,

<https://www.boe.es/eli/es/ai/1998/06/25/>

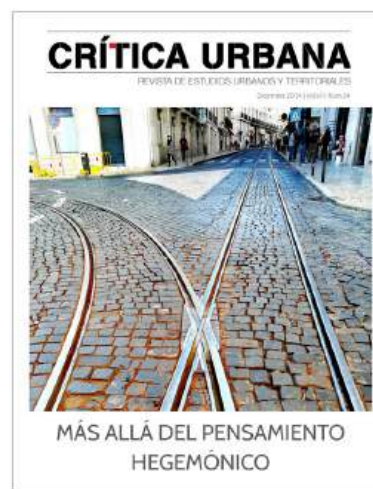
NOTA SOBRE LA AUTORA

Nery Díaz Prieto. Presidenta de Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde. Chairega de nacimiento y afincada en Lugo, es madre, abuela y fotógrafa de profesión. En los últimos años ha orientado su trayectoria vital hacia el activismo ambiental y social, implicándose de forma intensa tanto en el ámbito local como en el conjunto de Galicia.

Cofundadora en marzo de 2020 del grupo de Lugo de la Asociación En Acción Galiza, asumió la presidencia de la entidad en octubre del mismo año. Bajo su impulso, en 2023 la organización inició una nueva etapa como proyecto independiente y plenamente autónomo, consolidada con la creación de su propia página web –ecoloxistas.org– y con la adopción de un nuevo logotipo y de la marca registrada Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde, denominación que la asociación prevé regularizar próximamente tanto en el Rexistro Central de Asociacións como en el Rexistro de Asociacións Ambientais, donde figura desde 2020 y 2021 respectivamente.

Uno de los pilares que definen su labor al frente de la entidad es el compromiso ético: la asociación acordó no recibir subvenciones de ningún tipo y funciona exclusivamente mediante trabajo voluntario, altruista y con apoyo de justicia gratuita.

Durante su presidencia, Ecoloxistas Galicia Atlántica e Verde ha alcanzado una notable capacidad de actuación jurídica y técnica, manteniendo alrededor de 70 medidas cautelares sobre proyectos macroeólicos en Galicia y obteniendo sentencias favorables en dos procedimientos mineros, hitos que reflejan la relevancia del movimiento vecinal organizado y la firmeza de su defensa del territorio.



CRÍTICA URBANA

ISSN 2605-3276



DIRECCIÓN: Maricarmen Tapia Gómez.

EQUIPO EDITORIAL: Jerónimo Bouza, Nadja Monnet; Maricarmen Tapia; Aníbal Venegas.

REDACCIÓN: Emanuela Bove, Nápoles; Vicenç Casals, Barcelona; Fabiola C. de Souza Cordovil, Maringá; Miquel Domingo, Barcelona; Isabel Duque, Bogotá; Daniel Jiménez Schlegl, Barcelona; Rubén Lois, Santiago de Compostela; Alfonso Raposo, Santiago de Chile; Eulàlia Ribera, Ciudad de México; Mercè Tatjer, Barcelona.

MAQUETACIÓN: Fernando Pérez Barral.

COLABORAN:

ASESORES: Raquel Águila, Santiago de Chile; Eveline B. Algebaile, Rio de Janeiro; Fransualdo Azevedo, Natal; Jonatan Baldiviezo, Buenos Aires; Cristina Botana, A Coruña; Horacio Capel, Barcelona; Marcos Bernardino de Carvalho, Sao Paulo; Nadia Casabella, Bruselas; Jeffer Chaparro, Bogotá; Patricia Corvalán, Santiago de Chile; Manuel Delgado, Barcelona; El Rogle Cooperativa, València; Lucía Escrigas, A Coruña; Álvaro Ferreira, Rio de Janeiro; Ángela A. Ferreira, Natal; Liliana Fracasso, Bogotá; Jean-Pierre Garnier, París; Floriano Godinho de Oliveira, Rio de Janeiro; Oriol Nel·lo, Barcelona; Jorge Olcina, Alicante; José Luis Oyón, Barcelona; Alfredo Rodríguez, Santiago de Chile; João Seixas, Lisboa; José Luis Sepúlveda, Temuco; Clecio A. da Silva, Florianópolis; Ana Sugranyes, Santiago de Chile.



ANTE
Análise Territorial
GI - 1871

Un Grupo de
Investigación da



UNIVERSIDADE DA CORUÑA

Crítica Urbana. Núm. 38. Diciembre 2025. Editores: Maricarmen Tapia y Jerónimo Bouza. Avda. do Seixo, 170. 15626. A Coruña.